

Stefanoni, Pablo. **El nacionalismo indígena como identidad política: La emergencia del MAS-IPSP (1995-2003)**. *Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe*. Programa Regional de Becas CLACSO. 2002

Disponible en la World Wide Web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/mov/stefanoni.pdf>

www.clacso.org

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE,
DE LA
RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca> - biblioteca@clacso.edu.ar

El nacionalismo indígena como identidad política: La emergencia del MAS-IPSP (1995-2003)

Pablo Stefanoni*

Introducción

“No es solamente la escasez de estadísticas lo que dificulta el análisis empírico en Bolivia sino la propia falta de unidad convencional del objeto a estudiar” (Zavaleta, 1983:17).

El 29 de agosto de 1985 el presidente Víctor Paz Estenssoro firmaba el Decreto Supremo 21.060 en medio de una fuerte crisis hiperinflacionaria. La expresión “Bolivia se nos muere”, pronunciada por el líder histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) no sólo constituía una instancia de legitimación de las políticas de *shock* para frenar la crisis –*There is no alternative*–, sino que enunciaba la magnitud de las torsiones discursivas y el vuelco en las relaciones de fuerzas que sobrevendrían sobre el conjunto de la discursividad ideológica boliviana (ver Mayorga, 1996). Los objetivos de la Nueva Política Económica (NPE) apuntaban más allá de la estabilización macroeconómica y se articulaban con un proyecto de gran alcance, destinado a sustituir los componentes residuales del discurso Nacionalista Revolucionario (NR), sus sujetos y el Estado 'heredado desde el año' de la Revolución Nacional del '52, por un nuevo bloque de poder y un nuevo modelo de normalidad.

Pero luego de una década y media de reformas políticas y económicas, este proceso de “sustitución de creencias” (Tapia, 2000) volvió a chocar con la tradicional “atrofia” hegemónica que caracterizó –y caracteriza– al régimen político boliviano¹. Y la posibilidad de pensar un proyecto de país recayó nuevamente en la Bolivia plebeya que, a través de la sencilla y recurrente pregunta acerca de ¿Qué es Bolivia?, ha vuelto a desplegar un *litigio*, a instituir una parte de los que no tienen parte (Rancière, 1996) frente al orden colonial consagrado por la guerra de conquista, y preservado a lo largo de la historia oligárquica y republicana. Nuevas narrativas, imaginarios sociales y redes de sentido comenzaron a interpelar fuertemente el discurso “modernizador” impulsado por las élites políticas, económicas e intelectuales del país. Al tiempo que una suerte de “memoria explosiva”² contribuyó a modificar el “vínculo imaginario con las condiciones de existencia” (Ansart, 1983), proponer reorganizaciones alternativas del pasado, y enunciar –aunque sea aún de forma difusa– una reorganización diferente del futuro (Tapia, 2000).

Fue en este proceso de construcción de nuevas identidades –muchas de ellas con base campesino-indígena– y expansión de la acción colectiva, que comenzó a reactivarse la capacidad de las clases populares para creer en sí mismas. Y –luego del fracaso de la Unión Democrática Popular (UDP) a principios de los años ochenta, y del aislamiento casi total de la

izquierda más radical y extraparlamentaria– se fueron reconstituyendo formas de interpelación eficaces que pluralizaron los centros de irradiación discursiva (G. Linera, 2003:3) frente al “discurso único” neoliberal, que dominó el escenario ideológico desde 1985. Esta vez con *rostro indio*, por fuera del “paraguas” del NR y movilizándolo una fuerza social fundamentalmente rural: cocaleros del Chapare y los Yungas de La Paz, y comunarios aymaras del Altiplano.

En esta línea proponemos leer el ciclo de movilizaciones iniciado en 2000, el desborde electoral de los movimientos sociales en 2002, y la emergencia de una nueva “conciencia nacional”, de matriz indígena-popular, y una de cuyas expresiones es el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. El artículo se estructura en torno a cuatro apartados:

En el primero abordaremos el fin del ciclo estatal abierto con la Revolución Nacional de abril de 1952, y sus consecuencias sobre las estructuras de inter-unificación social y los repertorios de acción colectiva de los sectores subalternos. Al tiempo que una revisión rápida de la “guerra del agua” echará luz sobre los esfuerzos por superar la insuficiencia de las identidades colectivas, resultante del declive de la antigua identidad obrero-minera y de los cambios estructurales operados desde mediados de los años ochenta.

En el segundo apartado abordamos la constitución de las identidades campesino-indígenas a partir de tres ejes de análisis: i) un breve repaso del impacto de la Reforma Agraria de 1953 en los valles cochabambinos, que nos permitirá visualizar la “génesis” de las actuales organizaciones sindicales, sus funciones paraestatales, sus relaciones de insurgencia/subordinación respecto del Estado, el faccionalismo, y la negociación de una identidad campesina desde la cual gran parte del movimiento campesino boliviano “hace política” hasta el día de hoy; ii) en el katarismo/indianismo (aymara) encontraremos un contra-discurso capaz de releer el pasado y proveer una serie de imágenes de opresión colonial, revalorización de sí mismos y resistencia, que formarán parte del bagaje discursivo del movimiento cocalero, especialmente desde finales de los años ochenta; iii) y, por último, el actual discurso multicultural promovido por las élites políticas, que aparece como un terreno nuevo en el que algunos elementos de la tradición katarista fueron articulados –transformando el antagonismo en mera diferencia– al discurso neoliberal de los años ‘90.

En el tercer apartado nos centraremos en la coca y los cocaleros. En la primera parte introduciremos la problemática de la coca, el marco legal en el que se sustentan los proyectos de desarrollo alternativo, y las diferentes iniciativas de erradicación de la hoja de coca; y, apelando a algunos estudios recientes, intentaremos mostrar el porqué de las dificultades de estas iniciativas y la importancia social, económica y cultural de su cultivo. En la segunda parte de esta sección abordaremos el repertorio de acción colectiva (Tarrow, 1997) del movimiento campesino cocalero, transformado en un “centro convergente”³ de las luchas sociales, en un contexto de pérdida de protagonismo del sindicalismo obrero nucleado en la Central Obrera Boliviana. Estudiaremos aquí los significados que el significante *coca* fue adquiriendo para el movimiento campesino boliviano –e incluso para los sectores urbanos– a partir de una eficaz lucha simbólica de los cocaleros contra los discursos estigmatizantes del Estado y la embajada estadounidense.

Por último, en el cuarto apartado nos interrogaremos acerca de los alcances y límites –en cuanto a productividad política– de la empresa del MAS, la funcionalidad de los distintos significantes en la construcción de las solidaridades internas del movimiento, y la constitución

de los antagonismos y los adversarios que le permitieron aglutinar un campo político, construyendo una superficie de inscripción para el descontento social frente a las políticas neoliberales (transformadas eficazmente por el MAS –y otros grupos políticos y sociales– en un *crimen general* contra la sociedad toda). Nos detendremos en la “tesis del instrumento político” de las organizaciones sindicales, en el desborde electoral de esta experiencia de interpelación política en las elecciones de junio de 2002, y en las características de este nuevo movimiento político-sindical; al tiempo que intentaremos abordar desde una perspectiva crítica su desempeño parlamentario, las diferentes lógicas en juego, y la relación de fuerzas discursivas al interior de las instituciones democrático-liberales.

En nuestro criterio, el recorte propuesto aportará elementos de análisis que permitan avanzar en el estudio y la comprensión de esta experiencia cuyos elementos novedosos –al igual que en toda identidad política– se articulan con un conjunto de prácticas sociales sedimentadas y de identidades previas configuradoras de sentido (Aboy, 2001:68); en un proceso en el que nuevas contradicciones dan lugar a nuevos antagonismos y nuevas identidades. El texto está construido sobre un enfoque que hará hincapié en las lógicas articuladoras y las luchas hegemónicas presentes en la dinámica político-social; entendiendo por *hegemonía* una forma particular de articulación de universalidad y particularidad, o dicho de otra forma, “una universalidad contaminada por la particularidad” (Laclau, 2003:56), dado que “los efectos *universalizantes* hegemónicos van a ser irradiados a partir de un sector *particular* de la sociedad” (Ibid:55; subrayado en el original) con capacidad para que sus objetivos sectoriales actúen como el “nombre” de una universalidad que los trasciende.

Reformas estructurales o epílogo al libro del '52

“Todo debemos aprenderlo en el gran libro de abril [de 1952], en sus hojas perdidas, todo lo que hoy vivimos depende de la manera en que ocurrieron esos días; todo está en aquel espejo hecho de fuego para ver lo que se ha de hacer, porque el proyecto del porvenir está hecho con los pedazos del pasado, y también lo que no debemos hacer (R. Zavaleta, *El Diario*, 11-4-1971, citado en Tapia, 2002:96).

Bolivia –un país marcado por la gelatinosidad de sus estructuras institucionales, y por la marginalidad en el contexto internacional (G. Linera, 2001a:9)– no fue ajena a las transformaciones operadas en América latina desde fines de los años setenta, en el contexto de fuertes crisis políticas, económicas y sociales. A mediados de la década del ochenta, la nueva correlación de fuerzas nacionales e internacionales se tradujo en la implementación de un conjunto de “reformas estructurales” que alteraron profundamente la dinámica económica y social, y consolidaron la hegemonía de los sectores portadores de un “discurso antiestatista radical”⁴ (Mayorga, 1996:55) que promovió un nuevo armazón institucional y simbólico, destinado a desmontar las estructuras mentales y las estructuras materiales que produjo el pasado nacionalista (Tapia, 2000), y que durante casi cincuenta años constituyeron “la condición necesaria para las pretensiones y el ejercicio del poder” (Mayorga, 1996:79).

Durante todo el siglo XX Bolivia fue conocida por sus riquezas mineras –explotadas por la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) desde 1952– y por la vigorosidad del movimiento minero como sujeto político-social, especialmente desde los años cuarenta. La previsibilidad del futuro, dada por el contrato por tiempo indefinido y la centralidad técnico-productiva del obrero de oficio, permitieron la constitución de una cadena de herencias culturales y simbólicas que aseguraban la acumulación de la experiencia sindical de clase, junto con la construcción del “espíritu épico” y la autopercepción (obrero) protagónica en el mundo, que caracterizaron a los mineros bolivianos (G. Linera, 2001:69). La presencia de una “narrativa

interna de clase”, y de un espacio físico de sedimentación y continuidad de la experiencia colectiva posibilitaron –material y simbólicamente– el desarrollo de una identidad obrera caracterizada por “una potencia narrativa de largo aliento” y una fuerte repercusión en el ámbito estatal, capaz “de disputarle [a la burguesía] el sentido de lo general, de lo global, de lo nacional” (Ibid:199). A través del sindicato los obreros mineros no sólo accedieron a los derechos ciudadanos, sino que fueron capaces de convocar al resto de las clases y fragmentos sociales subalternos y crear hegemonía (Ibid). Su “ímpetu por integrar discursiva y prácticamente los reclamos de sectores subalternos con los suyos [construyó] una imagen de nación plebeya articulada al minero” (Ibid: 204) que sobrevivió –en alguna medida– hasta 1985.

Como ya mencionamos, el 29 de agosto de ese año se transformó en otro de los “parteaguas” de la historia boliviana: a veintitrés días de asumir el gobierno, Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) dicta el DS 21060 que desmontará completamente las estructuras aun vigentes del Estado del '52 (Toranzo R., 2002:185)⁵. El MNR afirma que las medidas formaban parte de “la gran batalla contra el poder dual y contra las aberraciones anarcosindicalistas que fueron los factores determinantes para la exasperación de la crisis” del final del gobierno reformista de la UDP, y que se trataba de recuperar la autoridad del Estado de manos de “los saboteadores de la ultraizquierda conservadora y reaccionaria”⁶.

La lectura en clave “ortodoxa” de la crisis estatal, política y económica, y el “trauma de la hiperinflación”⁷ como mecanismo de condicionamiento (Anderson, 1999), ayudaron a imponer una “hegemonía por neutralización” (Moulian, 1998:209), lograda a través del silenciamiento de los otros discursos, de la estigmatización con la que se les restó eficacia cultural, y del postulado acerca de la “muerte de las ideologías”, difundido por una ideología hegemónica que pretende la tecnificación de la política, despojada ya de la posibilidad de conflictos respecto del orden mismo (Ibid:56-7)⁸. El economista Toranzo Roca describe así el proceso de transformaciones, expresando el optimismo inicial de ciertos sectores de la sociedad boliviana, incluyendo a los intelectuales que apoyaron las reformas:

“Se asistió a una revolución institucional, cuando antes, más bien existía el hábito de mirar las revoluciones sociales y de insistir en la acción de los movimientos sociales. Y lo que se supone una diferencia todavía mayor, es que todos esos cambios institucionales han sido hechos, por lo general, desde arriba, desde el Estado, dentro del orden democrático, lo que no correspondía a la historia boliviana, habituada a transformaciones traumáticas, ‘revolucionarias’, emergentes de rebeliones sociales” (Toranzo R., 2002:183).

En consonancia con el contexto ideológico internacional –y bajo el asesoramiento del economista estadounidense Jeffrey Sachs– se abrió paso a un nuevo modelo, la “Nueva Política Económica” (NPE), basado en una perspectiva monetarista sustentada en el ajuste fiscal, la privatización (capitalización⁹) de empresas públicas, la desregulación de los mercados, y la apertura externa de la economía, una tarea completada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) (1993-1997). Todo ello anudado a un discurso de fondo: la democracia representativa como “el campo discursivo del que no se puede prescindir si se pretende alguna legitimidad” (Mayorga, 1996:86).

A los pocos meses de la aprobación del DS 21060 comenzaron a cerrarse las minas estatales deficitarias pertenecientes a la COMIBOL (DS 21377), lo que conllevó el despido –eufemísticamente llamado “relocalización”– de alrededor de 24 mil mineros. El antiguo Estado “intervencionista” dio paso al capital extranjero como locomotora económica, con los capitalistas locales como socios menores en áreas subalternas de la actividad económica, y el Estado en un papel de mendigo internacional y de policía local encargado de disciplinar a las clases

peligrosas (G. Linera, 2001a: 9); portador, a su vez, de un discurso capaz de enunciar *más y mejor y más rápido* lo que ya formaba parte de la nueva discursividad neoliberal: modernización, eficiencia y racionalidad (Mayorga, 1996, Anderson, 1999).

De esta forma se puso fin a la formación social que trajo consigo la Revolución de abril de 1952¹⁰, asociada por el nuevo discurso hegemónico con significantes como autoritarismo, dogmatismo, ineficiencia, corrupción, y finalmente, caos e incertidumbre (Mayorga, 1996), al tiempo que emergía un nuevo bloque de poder, corporizado en el *gonismo*.

“¡El agua es nuestra!”: nuevas formas de interunificación social y acción colectiva

A partir de estos cambios estructurales, la *idea de nación* “nacionalista” fue completamente abandonada. Y con ella se diluyó el ideal de la “modernización” a través de la sustitución de las estructuras tradicionales urbanas y campesinas, y se fue consolidando un sistema productivo “dualizado” entre un puñado de medianas empresas con capital extranjero, tecnología de punta, vínculos con el campo económico mundial, y un mar de pequeñas empresas, talleres familiares y unidades domésticas articuladas, bajo múltiples formas de contrato y trabajo precario, a estos escasos pero densos núcleos empresariales. Las mencionadas transformaciones en la minería no implicaron solamente una reducción de su peso numérico, también se operaron fuertes cambios técnico-productivos. Junto con el peso ascendente de la minería mediana se consolidó un sistema de trabajadores polivalentes, desjerarquizados, precarios, fragmentados y sistemas automatizados, en los que recayeron los saberes productivos, otrora en posesión del obrero de oficio (G. Linera, 2001:76). La extinción del proletariado de la minería estatal fue tanto física como material y cultural. El ascenso de los obreros de empresas privadas a la conducción de la COB “fue ya sobre un cuerpo muerto, casi extinto y de cuyas glorias sólo quedaba el nombre” (Ibid: 203); y sobrevino con ello, la “implosión de la autoconfianza obrera” (Ibid: 211), y la sustitución del viejo sindicalismo por lazos de fidelidad personalizada de confianza y subordinación entre el obrero y el patrón (Ibid: 214), que minaron las identidades obreras previas sin haber podido alumbrar una nueva narrativa de la clase.

El mencionado DS 21060 cristalizó la nueva correlación de fuerzas sociales impuesta por la NPE. Esta vez, frente a la resistencia minera el Estado responderá “con el silencio del extranjero que habla otro lenguaje y desconoce los signos del pacto de interioridad que había caracterizado la historia del movimiento obrero y del Estado nacionalista desde 1952 hasta 1985[...] [esta vez] el que responde es el impersonal empresario que cuenta sus monedas a medida que va colocando candados a los socavones” (Ibid: 109).

La fase defensiva pasa por momentos de derrota político-militar del movimiento obrero, a través de dos estados de sitio; y con ella, la versión más radical –y a la vez la negación y superación– del proyecto estatal de nacionalización, y la posibilidad de una efectiva democratización del orden social existente (Tapia, 2002b:46). En Calamarca –donde la “Marcha por la Vida y por la Paz” (1986) de los mineros fue cercada por el Ejército– ya no habrá nada que negociar. El Estado contra el que se enfrentan los mineros sencillamente es *otro* Estado, que ya no busca legitimarse mediante la inclusión sobornada de la plebe organizada como lo fue el Estado nacionalista, sino que busca hacerlo mediante la desintegración de cualquier atisbo de organización social, y la pulverización del tejido social autónomo de la sociedad (G. Linera, 2001:109). “El estupor de un regreso sin gloria [desde Calamarca] será la constatación fatal de que la identidad minera [...] había sido una identidad construida en el interior del Estado nacionalista, para el Estado, con el Estado, y que bastó que ese Estado cambiara su

composición, sus características estructurales, para que los mineros se quedaran sin narrativa, sin justificación, sin porvenir” (Ibid: 110).

Hubo que esperar varios años para que surgieran o se recuperaran –no sin dificultades– formas alternativas de organización, acción y construcción de identidades colectivas, que crecieron en protagonismo junto a la temprana pérdida de legitimidad del modelo de desarrollo neoliberal, y que fueron capaces de interpelar al conjunto de los sectores afectados por la fortísima ofensiva contra el espacio público. De esa forma se fue revirtiendo el ciclo de derrotas y dispersión operado desde mediados de los años ochenta, y las tradiciones de resistencia, oposición y lucha que caracterizaron al movimiento popular boliviano “renacieron” del declive de sus anteriores formas de organización, con una importante carga de renovación y un creciente protagonismo de las organizaciones campesino-indígenas; capaces de cuestionar eficazmente la capacidad de las élites para ejercer la dirección *intelectual y moral* de la sociedad. Nuevas formas de agregación social permitieron reconstruir parcialmente una nueva narrativa en el ambiente de “precariedad simbólica” (G. Linera, 2001a:37) resultante de los mencionados cambios técnico-productivos (precarización laboral, hibridación de las condiciones de clase y emergencia de identidades contingentes, derivadas en parte de los “contornos difusos” entre el trabajo y el no-trabajo), y del fin de la idea de Estado-nación que prevaleció desde 1952.

En términos de Revilla (1994:198ss), los sectores subalternos se vieron forzados a modificar –y (re)constituir– su identidad para adaptarse al nuevo ambiente, y superar la situación de insuficiencia de identidades colectivas previamente constituidas. Para ello adoptaron nuevas estrategias para readaptar preferencias y expectativas; cuyo resultado fue “la integración simbólica de los individuos cuya voz no se recoge en los proyectos existentes en la sociedad” (Ibid: 201).

En el caso boliviano se puede observar una agregación de individuos en un bloque de acción colectiva –que G. Linera (2001a:41) denomina “multitud”– emergente de una suerte de “asociación de asociaciones”, donde cada persona, presente en el acto público de encuentro, no habla por sí misma sino en nombre de una entidad colectiva local ante la cual debe rendir cuentas de sus acciones, de sus decisiones y de sus palabras. Estos movimientos –estructurados y unificados territorialmente a partir de reivindicaciones vinculadas a la gestión del agua, el acceso a la tierra y el precio de los servicios públicos– protagonizaron fuertes enfrentamientos con las fuerzas armadas del Estado, y promovieron nuevas experiencias de convergencia multisectorial. Emergieron de ellas procesos de identificación colectiva de los sectores subalternos, agrupados en torno a la figura del “pueblo sencillo y trabajador”, con capacidad para comportarse como “una forma de democracia y soberanía política” (G. Linera, 2001:50). Aunque su actuación mancomunada –en tanto agregación bajo la forma multitud– “es siempre una incertidumbre que sólo se resuelve en la práctica” (Ibid: 53).

Un ejemplo de ello fue la “guerra del agua”, acontecida en abril de 2000 en Cochabamba contra el aumento de tarifas resultante del contrato de concesión firmado con la empresa Aguas del Tunari¹¹. Con la puesta en marcha de métodos democráticos (asambleas y cabildos abiertos) y la construcción de barricadas en plena ciudad, se fue ampliando la participación de la población a través de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida –una asociación flexible que agrupó a organizaciones de base de “regantes”, obreros fabriles, profesionales, coccaleros, trabajadores precarios, desocupados, universitarios, amas de casa y jóvenes– y logró anular los convenios que ya habían sido aprobados por el Parlamento y el Poder Ejecutivo (Estellano, 2002).

Más aún, bajo la consigna “¡el agua es nuestra!”, y la convergencia de vastas fuerzas sociales en la Coordinadora, se puso en el orden del día la discusión sobre el significado del patrimonio público y de los recursos sociales colectivos frente a la ola privatizadora (Gutiérrez A., 2001:196); en una región en la que parte de la provisión de agua (perforación de pozos, verificaciones de calidad, administración del servicio) reposan en el trabajo colectivo de los vecinos y vecinas organizados en comités y asociaciones de agua potable, especialmente en los lugares donde la red central es inexistente. Y todo ello era amenazado por la Ley 2029 de Servicios, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ibid: 193)¹².

La defensa de los “usos y costumbres” y de las modalidades populares autónomas de resolución de problemas debe tenerse en cuenta a la hora de ponderar la profundidad y las consecuencias de la erosión del sentido de pertenencia al Estado que atravesaba al “viejo” movimiento obrero –labrado en los paradigmas del '52– en favor de nuevas formas de autonomía con respecto a un Estado democrático-liberal cuya asociación con el interés general se había evaporado por completo en el imaginario social, paralelamente al fracaso de las estrategias de modernización. En palabras de Tapia:

“Lo nuevo que pone la Coordinadora es que proporciona un referente de articulación organizativa y de acción para aquella gente que no tiene ninguno y se ve afectada por las reformas económicas, la flexibilidad laboral y los nuevos monopolios. La coordinadora es un referente incluso para los jóvenes de la calle, lustrabotas, así como para estudiantes o amas de casa” (2002b:58)¹³.

Estas movilizaciones posibilitaron la construcción de nuevas solidaridades, y el establecimiento de una amplia plataforma de contactos –entre sectores urbanos y rurales, especialmente con los campesinos coccaleros del Chapare, en el subtrópico cochabambino– que se tradujeron en un exitoso “desborde” electoral en las elecciones presidenciales de 2002, fundamentalmente a partir del liderazgo del dirigente coccalero Evo Morales, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo. La emergencia de nuevas identidades fue haciendo más difusa la aparente contradicción entre el campo y la ciudad, cada vez más subordinada a la contradicción patente entre la sociedad civil y el Estado, en su forma clientelar y prebendal de gobierno (Prada A., 2001:87); al tiempo que las interpelaciones a los sectores plebeyos de la sociedad boliviana asumían una renovada visión étnico-cultural andina.

Campeños e indígenas: entre el colonialismo y el multiculturalismo

“El olvido, y yo diría el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, de modo que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad [...] la esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común y que todos hayan olvidado muchas cosas” (Renan, 1987:85).

El presente apartado aborda los esfuerzos realizados por los movimientos campesino-indígenas por afirmar su identidad en un contexto en el que el profundo cisma que atraviesa la sociedad y que reproduce las dos repúblicas –sustentadas en la herencia colonial– continúa mediatizando los antagonismos de clase. Y se expresa en la doble naturaleza de las relaciones de dominación que pesan sobre la gran masa de trabajadores rurales, explotados como productores, pero al mismo tiempo oprimidos colonialmente como sociedad y como cultura (Rivera, 1984:16). Contra todos los intentos por neutralizarla, la cuestión de lo indio y colonial – junto con el racismo– resurge con fuerza en diferentes momentos de la lucha social en Bolivia.

El *abigarramiento social* fue la categoría utilizada por Zavaleta, y retomada y actualizada por Tapia, para avanzar en el análisis de las características de la sociedad boliviana. Dicha categoría de análisis hace referencia a una “condición de sobreposición de diversos tipos de sociedad, que coexisten de manera desarticulada, estableciendo relaciones de dominación y

distorsión de una sobre las otras” (Tapia, 2002a:10). El abigarramiento es el resultado de la superposición de “diferentes tiempos históricos, es decir, diferentes civilizaciones, en un mismo territorio y presente político y social” (Ibid:10), dando lugar a un país multisocietal con un Estado monocultural y monosocietal (Ibid:11), resultado del intento de querer unificar nacionalmente –a través de una superposición colonial– algo que pertenece a diferentes tipos de civilización y diferentes culturas a la vez (Ibid:17).

“La forma más general y duradera de la dominación colonial es lo que podemos llamar el estigma de la barbarie. La barbarie son los márgenes y el afuera de la civilización, que es el modelo (en movimiento) de la normalidad” (Ibid:104). El reconocimiento de la existencia de los indígenas y su inclusión en el orden legítimo se operará –desde la época colonial– a partir de la atribución de una identidad –“indio”– que les reserva el rol de súbditos de los conquistadores. Por ello se puede leer el estigma de la *indianidad* como cierre social y cultural más general, que realiza la exclusión política (Ibid:105). La certidumbre inicial de las élites liberal-positivistas acerca de la inexorable extinción física y social del universo indígena pronto dio lugar a la pesadilla del *asedio indio* –cuya imagen remonta a la rebelión de Túpac Katari en el siglo XVIII– la cual generará por mucho tiempo “los sentimientos elementales con que el criollaje urbano moldea su representación de la sociedad india dominada” (Rivera, 1984:35). Sentimientos que fueron reforzados con la rebelión de Zárate Willka en 1899, la cual agudizó la imagen del indio como bárbaro al que hay que exterminar. Ese movimiento desafió objetiva y subjetivamente las bases del poder de las élites criollas, ya que se trató del primer movimiento nacional de emancipación aymara, un movimiento que buscaba apropiarse del poder político y no un mero movimiento de protesta¹⁴.

Recién a mediados de la década del cuarenta encontramos los primeros intentos por revertir –parcialmente– la lógica colonial. Los decretos emanados del Primer Congreso Indigenal de 1945 –durante el gobierno de Gualberto Villarroel– suprimieron los servicios gratuitos de trabajo en las haciendas –*pongueaje*– y regularon obligaciones y derechos entre patrones y colonos. Al tiempo que la presencia del presidente de la República en una reunión de *la indiada* prefiguraba un nuevo proyecto estatal –interrumpido tras la caída de Villarroel y retomado por la Revolución de 1952– en el que el campesinado indígena ocuparía un papel protagónico (Rivera, 1984:66). Y el discurso acerca de la ciudadanía universal conllevará –no sin problemas, y más en el discurso público que en las prácticas reales– un quiebre en la legitimidad de la exclusión por criterios de raza y cultura (Tapia, 2002a:106). Pero esta conquista de derechos ciudadanos se hace en torno a la adscripción a una sola identidad cultural: la mestizo-criolla boliviana. Es una igualación en función de las instituciones democrático-liberales, pero no hay igualación en términos de reconocimiento de las instituciones y la cultura política indígena tradicional. Por ello el “capital étnico” –la “blanquitud” en términos de piel, de lenguaje, de apellido, en tanto *plus* social– complementará al capital económico y social, y ocupará un lugar de primer orden en la construcción de las estructuras de dominación: en el imaginario colectivo de las élites blanco-mestizas *lo indio* es –hasta el día de hoy– portador de una identidad criminalizada y estigmatizada¹⁵.

Pero mientras que el desarrollo de las instituciones liberales en Europa o en otros países de América latina fue el fruto de procesos de modernización económica que contribuyeron a desprender a los individuos de las fidelidades comunitarias tradicionales para convocarlos –en tanto “individuos autónomos”– a un nuevo agrupamiento (ver Žižek, 1998:165), en Bolivia este proceso de individuación se dio de forma sumamente incompleta. En palabras de Luis Tapia:

“[En Bolivia] el Estado-nación se levanta como discurso legal y estatal con un conjunto incompleto de instituciones republicanas pero sin el sustento de reales procesos de integración, ciudadanización y modernización de las estructuras productivas y las relaciones sociales. Esto es lo que [René] Zavaleta llamó *Estados aparentes*. Estados sin nación, sin nación producida en la construcción local del poder” (2002a:12; subrayado nuestro).

De allí las dificultades para que la nación potencial –cuyos fragmentos el revisionismo histórico nacionalista visualizaba en la historia boliviana– se transforme en conciencia nacional efectiva tal como ellos la concebían: como un “proyecto mestizo, elaborado por mestizos y para mestizos” (Tapia, 2002:68) con las clases medias como sujeto articulador y dirigente, integrador de las masas populares a los rumbos del mundo moderno como destinos compartidos (Tapia, 2002a:107).

En las secciones que componen este apartado abordaremos tres aspectos vinculados con las tensiones que acompañaron la conflictiva relación Estado/campesinos/indígenas en tres momentos de la historia boliviana: la Reforma Agraria de 1953 en los valles cochabambinos, la emergencia del katarismo/indianismo en el Altiplano en los años setenta, y el nuevo contexto pluri-multicultural instaurado por el neoliberalismo a partir de la reforma constitucional de 1994.

“Ya no somos esos tapados de antes”: Reforma Agraria y sindicalismo en los valles cochabambinos

La Reforma Agraria –promulgada en Ucureña el 2 de agosto de 1953, Día del Indio– fue en gran medida una respuesta del gobierno revolucionario a las fuertes presiones campesinas –especialmente de colonos y piqueros organizados en sindicatos– que transformaron violentamente las relaciones de fuerza entre la ciudad y el campo (y las relaciones de dominio y subordinación entre pueblos y comunidades agrarias) a partir de acumulación de un gran poder político y militar. Estos sindicatos –cuya vanguardia se encontraba entre los pobladores de los valles cochabambinos¹⁶, donde constituían el núcleo de la organización política de las comunidades– fueron fundamentales en la promulgación y puesta en práctica de la reforma, en primer lugar “porque confiscaban tierras y presionaban al gobierno a favor de una ley; en segundo, porque los trámites legales para la distribución de tierras debían iniciarse a través de éstos” (Lagos, 1997:66).

“Los cuarteles de milicias en el valle se convirtieron en los centros de decisión de los problemas cotidianos de la sociedad campesina sobrepasando [incluso] a la autoridad judicial, cuyos fallos difícilmente podían ser aplicados sin el consentimiento sindical” (Gordillo, 2000:83). Se trató de un enorme aparato sindical al servicio de la consolidación de la presencia campesina en la arena política regional, la destrucción del poder de la oligarquía terrateniente, y la ocupación y distribución de las tierras de las haciendas (Ibid: 35-72). En este proceso “todas las tierras de hacienda, calificadas como latifundios por los jueces agrarios, se distribuyeron entre ex colonos; mientras que las de las haciendas medianas fueron sólo parcialmente afectadas” (Lagos, 1997:68)¹⁷.

Las investigaciones citadas –Gordillo (2000), Lagos (1997) a partir de un trabajo etnográfico en Tiraque– enfatizan la construcción de relaciones de poder en el ámbito local, y relativizan análisis más “estadocéntricos” que hacen hincapié en la subordinación campesina al Estado nacionalista. En dichos trabajos los autores sostienen que “los doce años de gobierno movimientista (1952-1964) se caracterizaron por una diversidad de alianzas y conflictos entre los que estaban en el poder y entre líderes campesinos regionales, no menos poderosos” (Lagos, 1997:73); y sus identidades –forjadas en las luchas pre y post revolucionarias– les

permitieron a los campesinos proyectarse “como actores dinámicos en la arena política y [...] ubicarse con un alto grado de autonomía en el campo de fuerza donde se negoció cotidianamente el carácter del Estado revolucionario, entre 1952 y 1964” (Gordillo, 2000:21), cuando las milicias fueron desarmadas por la dictadura barrientista, en el contexto del Pacto Militar Campesino.

Sin embargo, esto no debe ocultarnos que la dinámica sindical desde la Revolución del '52 quedó inmersa en la competencia entre las dos principales fracciones del MNR. El ala derecha, operando desde la prefectura de Cochabamba –con apoyo de la Iglesia Católica–, y el ala izquierda desde el Ministerio de Asuntos Campesinos (MAC) –con apoyo de la COB– se disputaron el control del movimiento sindical campesino (Ibid:36), en un contexto discursivo marcado por las frecuentes declaraciones de autoridades policiales y militares acerca de la labor de “agitación comunista” que se desarrollaba en las áreas rurales del país (Ibid: 43)¹⁸. Los campesinos de los valles se dividieron en dos liderazgos regionales: la Central Campesina de Ucureña –liderada por José Rojas– en el Valle Alto, y la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba –liderada por Siforoso Rivas– en el Valle Bajo.

Los enfrentamientos intracampesinos se agudizaron en el tercer período de gobierno del MNR (1960-1964) cuando las luchas internas al interior del campo nacionalista adquirieron un carácter violento: la denominada “Champa Guerra”, que enfrentó durante cuatro años a las centrales de Cliza y Ucureña (en el Valle Alto) es una de las mayores expresiones de los enfrentamientos entre facciones campesinas vinculadas con las luchas al interior del MNR (ver Gordillo, 2000). Pero sin duda el momento de mayor subordinación del movimiento campesino se produjo de la mano del Pacto Militar Campesino, firmado en Ucureña el 9 de abril de 1964, y leído en quechua ante unas 30 mil personas reunidas para celebrar un aniversario más de la gesta de abril del '52 (Soto, 1994).

La proclamación del binomio Víctor Paz- René Barrientos para las presidenciales de 1964 se impuso con fuerza en los valles, frente al debilitamiento de las fracciones de izquierda que promovían la alternativa Víctor Paz- Juan Lechín; en paralelo a la construcción de un “espacio militar” con una influencia creciente sobre el sindicalismo campesino valluno. El punto de inflexión en la balanza de las relaciones de poder se produjo cuando el general Barrientos logró la pacificación entre Cliza y Ucureña (1963), y su imagen “no sólo se agigantó en el espectro político, sino que se proyectó hacia las esferas más altas del poder nacional” (Gordillo, 2000:182-183). En paralelo, los militares incrementaron su actividad asistencial, entregando escuelas y postas sanitarias, y fueron moldeando una nueva imagen de la institución –“alternativa de paz frente a la violencia”– y un discurso redentor de los campesinos, con el claro objetivo de alcanzar el poder (Ibid:183). Cosa que efectivamente ocurriría en noviembre de 1964, cuando se cerró el cerco militar sobre Paz, y Barrientos se hizo con el poder.

La injerencia directa del Ejército en las estructuras sindicales (sustituyendo la articulación sindicato-partido-Estado por una nueva estructura de enlace entre sindicalismo paraestatal y Ejército) perduró hasta finales de la década del sesenta, cuando la reacción campesina frustró el intento de Barrientos de imponer el impuesto único agropecuario a la propiedad individual de la tierra (Rivera, 1984:119). En esos años, la subordinación al Estado –sintetizada en el Pacto– se constituyó en la alteridad que facilitó el surgimiento de nuevas identidades al interior del movimiento campesino-indígena (con especial intensidad en el Altiplano) a partir de la desestabilización de las viejas identidades subordinadas al Estado nacionalista y transformadas en fuerzas de choque contra los obreros mineros. Se instituirán así nuevos sentidos y

horizontes de acción, que implicarán nuevas posibilidades de interunificación entre los sectores subalternos.

El Bloque Independiente Campesino se desarrolló a partir de la denuncia del Pacto, y su beligerancia lo llevó a buscar nuevas solidaridades políticas, afiliándose a la COB. Al tiempo que una segunda vertiente de sindicalismo campesino independiente surgió entre los colonizadores de las regiones tropicales de Santa Cruz, Alto Beni (La Paz) y Chapare (Cochabamba) (Ibid:125), que habían migrado desde el Altiplano desde los años sesenta y cuya instancia máxima –la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia– también se afilió a la COB. De esa forma comenzaba a romperse el aislamiento del movimiento minero, duramente reprimido por la dictadura barrientista (masacres de 1965 y 1967).

En apretada síntesis, podemos sostener que la lucha de los campesinos contra el poder hacendal y por la distribución de las tierras, las estrategias de cooptación y subordinación puestas en práctica por los sucesivos gobiernos emenerristas y militares, los apoyos alternativos de Víctor Paz Estenssoro a los diferentes bandos en lucha al interior del sindicalismo, y el pragmatismo que adquirió la relación de las facciones sindicales con gobiernos (nacional y locales) y Fuerzas Armadas, definieron el complejo entramado de luchas cruzadas, en muchas ocasiones un “pasa pasa” en las fidelidades políticas, y un sustrato de violencia cotidiana en que se negoció la identidad campesina de los valles cochabambinos en el período post '52. También en esas redes de sentido se moldearon las imágenes acerca del “campesino valluno audaz y temerario” –en ocasiones contrapuesta por la derecha del MNR a imágenes alegóricas de las “virtudes naturales de la ‘raza’ indígena” (Gordillo, 2000:85,166)–, y una densa combinatoria de sumisiones y resistencias frente al Estado nacionalista.

Como constató Lagos (1997) en su trabajo de campo en Tiraque, las identidades y prácticas políticas no responden a una esencia ontológica, sino que se definen de acuerdo a construcciones culturales de clase y etnicidad. Éstas giran en Bolivia en torno a la interpretación subjetiva y cultural de dos categorías centrales: campesino e indio. Pese a que “ser campesino” en los valles significa tener acceso a la tierra, hablar quechua y –lo más importante para los varones– saber manejar el arado de bueyes, ambos conceptos son ambiguos, lo que permite “manipular y disputar sus múltiples significados, así como la posibilidad de usarlos para establecer alianzas políticas y crear distancias culturales” (Ibid:20). Mientras que el concepto *campesino* es una “categoría inclusiva que esconde las diferencias de clase”, *indio* es “una categoría excluyente que distingue a los vecinos de los campesinos, y que está basada en nociones culturales de raza e imágenes dominantes que asocian el campo, y la gente que allí vive, con la ‘indianidad’” (Ibid). Estas relaciones “contingentes” entre categorías étnicas (separadas de los rasgos fenotípicos y en gran medida dependientes de aspectos sociales u ocupacionales) implicaban que los individuos podían “pasar” en ocasiones de una categoría a otra, como la autora constató que ocurría entre los tiraqueños; y cita el caso de piqueros, agricultores y artesanos “blancos” que –según registros de la primera década de 1900– cuando perdieron sus tierras dejaron de ser “blancos” y se convirtieron en “mestizos”. (Un interesante debate acerca de cómo contabilizar a los indígenas se encuentra en Lavaud y Lestage, 2002, y los comentarios críticos a su artículo).

Estas observaciones sobre la formación negociada de las identidades étnicas en los valles cochabambinos ya nos va advirtiendo acerca de las fronteras generalmente difusas con las que nos toparemos a la hora de analizar los discursos del movimiento campesino cocalero, afectado fuertemente por los procesos de mestización, y por autoadscripciones cambiantes de los

propios sujetos en diferentes contextos discursivos sobre la cuestión étnica.

“Para que mi hija no sea tu empleada”: autonomía y recomposición de la identidad étnica aymara

Las nuevas generaciones indígenas urbanas, producto de las migraciones del campo a la ciudad, habían accedido en parte a los estudios superiores; viviendo con más crueldad la discriminación racial desde las formas más sutiles hasta las más abiertas (Patzí, 1999:32). Se fue conformando así un estrato intelectual aymara “que busca dar expresión a este sentimiento de aguda frustración que acompaña a su experiencia urbana” (Rivera, 1984:127).

Nuevas elaboraciones político-ideológicas irán madurando desde principios de la década de 1970, poniendo en evidencia el fracaso de la política de ciudadanización impulsada por la Revolución del '52 que, como mencionamos, concebía a Bolivia como un país homogéneo, integrado y subordinado a la concepción occidental (Patzí, 1999:34)¹⁹. Estos estratos intelectuales urbanos –principalmente de origen aymara– *reinventarán* al indio como sujeto político-social, junto con una narrativa capaz de darle un sentido histórico a la lucha indígena por la autonomía; y en poco tiempo se articularán con las nuevas generaciones rurales, “producto de la reforma agraria, la escuela rural, el cuartel y la nueva economía mercantil” (Rivera, 1984:128), que rechazaban crecientemente los sistemas de cooptación movimientistas, profundizados bajo la dictadura de Barrientos. Raúl Prada A. señala que al romper con el Pacto Militar Campesino el katarismo rompía también con la herencia ideológica del Movimiento Nacionalista Revolucionario, en un proceso de “desmovimentización” del campo que no había sido logrado por el sindicalismo izquierdista, que tuvo una puntual influencia en el valle cochabambino. Si bien en los hechos el Pacto Militar Campesino se rompe con la Masacre del Valle (1974), en el imaginario social se rompe con la irrupción ideológica del katarismo (Prada A., 2002a).

Este movimiento –junto al pequeño Partido Indio de Fausto Reinaga– emergerá como un renovado esfuerzo de autonomía y afirmación político-cultural indígena con múltiples manifestaciones institucionales y organizativas, tanto en las ciudades como en diversas áreas rurales, especialmente aymaras (Rivera, 1984:131-32). Su afirmación identitaria se constituyó en una forma de resistencia, lucha y autorrealización contra las estigmatizaciones colectivas –de origen étnico o cultural– que padecían en los diversos ámbitos de la vida social (ver Tapia, 2002a:111). Para lo cual “arrancaron a la figura de Túpac Katari del discurso dominante, donde figuraba como inocente ‘precursor’ de la lucha por la independencia”, y lo resignificaron como un héroe de la causa indígena, capaz de retornar multiplicado en millones. Al tiempo que resignificaban a la forma sindicato, organismo del nuevo poder autónomo, pero a la vez producto del horizonte histórico del Estado del '52 (Rivera, 1984:164).

Dos elementos configuran así el discurso katarista: a) la continuidad de una situación colonial que se impuso sobre una sociedad originariamente libre y autónoma; y b) la idea del “despertar del gigante dormido”, en alusión a la mayoría étnica nacional, que hace valer su condición numérica frente a la opresión criolla (Ibid:164). Mientras tanto, en el plano estatal se asistía a profundos cambios que van a minar en forma decisiva la matriz sobre la que se asentaba el Estado del '52. La masacre en los valles de Cochabamba –ante las protestas contra el paquete económico de la dictadura de Banzer (1971-1978)– acabó con el último reducto donde las representaciones colectivas aún permanecían moldeadas por las instituciones del '52 (memoria corta) (Rivera, 1984:134); mientras las nuevas políticas económicas contribuirán al quiebre del sustento ideológico de la subordinación campesina al Estado (Ibid:137).

Convertida en corriente sindical mayoritaria en el mundo rural, dos organizaciones levantarán las banderas del katarismo en el campo político a fines de los años setenta: el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK), y el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA). Rivera (1984:152) analiza los ejes político-ideológicos que diferencian a ambas fracciones: mientras el MRTK adopta una posición más flexible frente a las corrientes de la izquierda criolla y se muestra más receptivo hacia la herencia del '52, el MITKA se mantendrá más apegado al simbolismo y los modelos organizativos indios, y más refractario hacia las corrientes políticas *q'aras*²⁰; enfatizando la opresión indígena como eje de su discurso.

La creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979 representó un salto cualitativo en el afianzamiento del nuevo sindicalismo agrario; siendo la corriente katarista la que capitalizó en mayor medida los sentimientos anti-militares generados por la represión banzerista: Jenaro Flores –dirigente MRTK– fue elegido secretario ejecutivo de la nueva central unitaria, que actuará en el seno de la Central Obrera Boliviana. Y como símbolos de la nueva etapa, ponchos y *lluch'us* romperán la monotonía de los trajes occidentales en la COB (Rivera, 1984:156). Esta articulación obrero-campesina constituirá un auténtico movimiento de masas con autonomía ideológica y organizativa (Ibid:159), con una fuerte participación en los años conflictivos que van entre la caída de Banzer en 1978 –en medio de un agravamiento de la crisis política– y el triunfo de la UDP en 1982. Las tres elecciones y los cuatro golpes de Estado entre 1978 y 1980 (Ibid:123) pintan un cuadro de las dimensiones de las crisis que atravesaba al conjunto del régimen político boliviano.

A fines de los años ochenta se observa un escenario nacional caracterizado por la división de la CSUTCB entre el discurso *pluri-multi* y el reclamo de autodeterminación, el ascenso del movimiento cocalero (que se analizará por separado) y la consolidación de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano como aglutinadora de varios grupos étnicos dispersos²¹. El discurso autodeterminista quedó plasmado principalmente en el MITKA, uno de cuyos desgajamientos dará a luz a la *Ofensiva Roja de los Ayllus Tupackataristas*, que a fines de los ochenta/principios de los noventa inició una estrategia de lucha armada, principalmente focalizada en sabotajes contra la infraestructura (torres de alta tensión, gasoductos, etc.), y la denuncia de la ineficacia de la acción parlamentaria.

La reivindicación del término “indio” partía de la afirmación de que “como indios nos explotaron, como indios nos liberaremos” (Albó, 2002:80). Las acciones fueron llevadas a cabo por el brazo armado de la organización: el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). En poco tiempo la dirección del movimiento es apresada, entre ellos quien lideraba la “guerra de las comunidades”: Felipe Quispe Huanca, conocido como el *Mallku* (autoridad máxima de las comunidades)²² quien tuvo participación en el movimiento katarista de los setenta y el actual vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Su paso por el bachillerato e incluso por la universidad –donde estudió Historia– le permite “tener un discurso ilustrado y coherente sin haber perdido su estilo popular, cuando no demagógico” (Albó, 2002:81). Su efectivo manejo del discurso lo llevó a responder la pregunta de la periodista Amalia Pando –al momento de entrar en prisión– acerca de porqué realizaban las actividades de sabotaje, con un contundente: “porque no quiero que mi hija sea tu empleada [...] las acciones tomadas son en repudio a 500 años de explotación” (Patzí, 1999:84).

El ascenso de Quispe a la secretaría ejecutiva de la CSUTCB en 1998 marcó una nueva etapa para el movimiento campesino-indígena²³. La revitalización de las estructuras comunales y del discurso étnico-nacional indígena, impulsada por el nuevo liderazgo aymara en la central

campesina, se plasmó en los levantamientos aymaras de abril y setiembre de 2000, que conmovieron las estructuras de dominación –materiales y simbólicas– de la nación mestizo-criolla, a partir de estructuras de movilización basadas en la *forma comunidad* (G. Linera, 2001a:56). Con capacidad para expulsar y sustituir al poder estatal por un complejo sistema de autoridades comunales (cabildos, asambleas, comités de bloqueo, etc.), y hacer frente a las fuerzas armadas del Estado a través del traslado de la institución del trabajo comunal al ámbito guerrero (Ibid: 70).

La profundidad de los efectos políticos de estas acciones están aún por aprehenderse en toda su dimensión, pero resulta claro el agrietamiento de la estructura simbólica colonial que “había acostumbrado a colonizados y colonizadores a que los indios se dirijan a los *q’aras* en actitud de sumisión, de petición, de genuflexión o de reclamo lloroso” (Ibid: 73). El discurso de igualdad entre indígenas y blancos, de autogobierno y de nuevas formas de gestión pública en la administración estatal parecen estar comenzando a remover “los cimientos republicanos de un Estado racista y excluyente que en 176 años de vida, nunca ha incorporado a las mayorías culturales, ni a las lenguas y prácticas indígenas a la esfera pública legítima” (Gutiérrez A. y G. Linera, 2002:21). A su vez, este renacer de la “guerra de razas” (Foucault, 1996) pone de relieve los límites del nuevo discurso multiculturalista articulado con el segundo período de reformas neoliberales (1993-1997).

Multiculturalismo, o el nuevo discurso de las élites “blancoides”

“A veces las cosas se nombran para desarticularlas y no para articularlas, ya que en su clandestinidad o exclusión se hacen peligrosas; es una forma discursiva de conjurarlas” (Tapia, 2000:79)

El katarismo no fue inmune a las políticas de cooptación estatales, esta vez anudadas con un discurso que enfatizaba el carácter multicultural de la nación boliviana. La tendencia que se había transformado en partido político –denominada Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL) luego de la escisión de 1985– fue paulatinamente subsumida y asimilada por el Estado. Y, en 1993, su principal dirigente –el aymara Víctor Hugo Cárdenas– acompañó como candidato a vicepresidente de la República al “neoliberal” Gonzalo Sánchez de Lozada, diezmando lo que quedaba de su estructura y legitimidad política (Patzí, 1999:41).

Albó (2002:70) reconoce que su selección como candidato por el MNR, al que no le faltaban candidatos propios con experiencia, fue resultado de un estudio de *marketing* político a través de grupos focales. En opinión de los asesores de imagen, “el compañero de Goni debía tener las cualidades opuestas y complementarias a las del candidato presidencial, que era empresario minero, ligado a la oligarquía blanca, muy relacionado con los Estados Unidos – donde vivió de niño y contrajo el acento ‘gringo’ que lo caracteriza– y uno de los principales artífices del modelo neoliberal vigente en el país desde 1985”. De esta forma se fue articulando el discurso *pluri-multi* de los organismos financieros internacionales con el de raíces andinas; dando origen a lo que Patzi (1999:44) denomina *intermediarios culturales parasitarios*, “ya que en vez de fortalecer la identidad de las naciones oprimidas la usarán solamente como un espacio de adquisición de beneficios grupales o personales”.

Luego de ganar las elecciones, Cárdenas afirmará –en discursos leídos en aymara, quechua o guaraní– que estaba comenzando un *pachakuti*, una nueva era, que se regiría por el código incaico del *ama suwa*, *ama llulla*, *ama qhilla* (no seas ladrón, mentiroso ni flojo), al que agregó un cuarto precepto en línea con su pasado katarista: *ama llunk’u* (no seas adulón) (Albó, 2002:71). A su vez, como presidente del Congreso, Cárdenas promovió un conjunto de

medidas: la incorporación en la Constitución Política del Estado (CPE) –Artículo 1– del reconocimiento del carácter “multiétnico y pluricultural” del país; el carácter “intercultural bilingüe” de la educación boliviana, la Ley de Participación Popular (LPP), etc. Pero rápidamente se amplió la brecha entre el reconocimiento internacional –y de los no indígenas– al “aymara más globalizado”, y la percepción de las propias comunidades, que comenzaron a llamarle *llunk'u* o traidor (Ibid)²⁴.

Como afirma Patzi (1999:55 ss), el nuevo discurso *pluri-multi* promovido desde el Estado se vio fuertemente reforzado por las líneas de financiamiento de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial. Las ONG´s se erigirán como los nuevos intermediarios culturales legítimos –y ejecutores del financiamiento internacional– para llevar adelante diversas propuestas e iniciativas enmarcadas en la nueva moda ecológica, de respeto al medio ambiente y a los “grupos vulnerables”. Estas políticas adoptadas por el Estado boliviano como parte de su amoldamiento al “modelo de normalidad” de la globalización capitalista reconocerán las instituciones propias de cada cultura solamente en funciones subalternas y periféricas (Tapia, 2002a:118), mientras que el centro político-económico sigue siendo monocultural.

Slavoj Žižek ha definido al multiculturalismo actual como la *lógica cultural del capitalismo multinacional*. Dice el autor esloveno:

“La ‘tolerancia’ liberal excusa al Otro folclórico, privado de su sustancia (como la multiplicidad de comidas étnicas en una megalópolis contemporánea), pero denuncia a cualquier Otro ‘real’ por su fundamentalismo [...] uno se ve tentado aquí de reactualizar la vieja noción marcuseana de ‘tolerancia represiva’, considerándola ahora como la tolerancia del Otro en su forma aséptica, benigna [...]” (Žižek, 1998:157).

En realidad, se reconoce y acepta lo que le conviene a quien ejerce –desde el Estado– esa distancia y función de universalidad (Tapia, 2002a:127), configurando así una “forma de aceptación de la diversidad cultural sin democratización efectiva” (Ibid) funcional a la desidentificación nacional promovida por el discurso y las prácticas de las clases dominantes. Desde una suerte de “posición global vacía” esta variante de multiculturalismo asociada a la etapa del capitalismo globalizado, “trata a cada cultura como el colonizador trata al pueblo colonizado: como ‘nativos’, cuya mayoría debe ser estudiada y ‘respetada’ cuidadosamente” (Žižek, 1998:172).

En otras palabras, el multiculturalismo es un racismo que vacía su posición de todo contenido positivo. El multiculturalismo no es directamente racista, no opone al Otro los valores *particulares* de su propia cultura, pero igualmente mantiene esa posición como un privilegiado *punto vacío de universalidad*, desde el cual uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente las otras culturas particulares: el respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es precisamente la forma de reafirmar su propia superioridad (Ibid). Mientras el capitalismo se expande a lo largo del planeta, provocando una homogeneización sin precedentes del mundo contemporáneo, la “crítica cultural” –en su versión postmoderna– parece actuar como una válvula de escape que incluso hace “invisible” la presencia de éste –el capitalismo– a partir de una politización de luchas particulares que deja intacto el proceso global del capital (Ibid: 176 ss).

Coca, cocaleros e identidades

“Cuando el blanco quiera hacer lo mismo (akullikar) y se atreva a utilizar como vosotros esas hojas de coca, le sucederá todo lo contrario. Su jugo que para vosotros será fuerza y vida, para vuestros amos será vicio repugnante y degenerador; mientras que para vosotros será un alimento casi

Pocos auguraron que la emergencia del movimiento sindical cocalero a mediados de los años ochenta en la región del Chapare –en el subtrópico cochabambino– alteraría tan profundamente el mapa político y social boliviano²⁵, dando origen a nuevas identidades políticas y mostrando gran capacidad de interpelación sobre los sectores subalternos. Se trata de una región aparentemente sin historia y carente de la resonancia ancestral que tanto fascina a muchos estudiosos sociales (Argandoña, 2002). Habitado originalmente por indígenas selváticos yuracarés, el subtrópico cochabambino constituye uno de los contextos sociales más atípicos de la geografía boliviana por sus características sociales, económicas, demográficas y políticas. Su conformación histórica responde a diversos procesos de colonización: a) dirigidos desde el Estado: iniciados en los años veinte y profundizados a partir de los años sesenta, cuando se funda el Instituto Nacional de Colonización, y b) espontáneos: especialmente durante los primeros años setenta, producto de la crisis económica, y en la década del ochenta, impulsados por las sequías en el Altiplano (1981-85) y la “relocalización” minera (1985). Entre 1976 y 1992 la población censada en esta región se incrementó de 32.836 a 108.276 habitantes, un elevado porcentaje tiene un origen quechua y aymara, y un 81% habla quechua (Zegada, 2002:131-3). De las 40 mil familias que habitan el trópico una parte de la población es “flotante”, manteniendo una doble residencia entre su actividad en el Chapare y la zona de origen, adonde regresan en época de cosecha o fiestas rituales (Ibid). Y la mayoría se dedicó al cultivo de coca.

Desde fines de la década del ochenta esta región ha quedado inmersa en la denominada “guerra contra las drogas” –declarada por el Estado boliviano con apoyo de la *Drug Enforcement Agency* (DEA) estadounidense– y estigmatizada como “zona roja” donde los narcotraficantes fabricaban cocaína en connivencia con los agricultores para exportarla a los países consumidores; aunque en realidad los primeros aprovechaban con intermediarios la oferta de coca de los mercados abiertos de las poblaciones, y la disponibilidad de mano de obra barata como “pisadores” en las pequeñas pozas de maceración de coca, o como porteadores (Ballesteros et al, 2001:32). Estas consideraciones oficiales, junto a la creciente resistencia de los cocaleros, han proyectado a esta aislada región subtropical a la escena nacional e internacional, como una región de alta intensidad política y de inmediato conflicto con el *imperio* (Prada A., 2002).

“Sin coca no hay vida”: entre la erradicación y el desarrollo alternativo

Tempranamente, la coca fue utilizada como energético para maximizar la productividad de los indígenas en la brutal explotación a la que fueron sometidos, especialmente a partir del descubrimiento de las ricas vetas de plata de Potosí en 1545 (Argandoña, 2002). Sin embargo en los inicios del período colonial la hoja de coca era tenida por una invención del demonio, por lo que se la consideraba una hoja diabólica (O’Phelan:1995:141). Este juicio provenía principalmente de su papel en rituales nativos (los pobladores indígenas creían que sabiéndola usar con propiedad podía traerles suerte, y calamidades al enemigo) y se mantuvo hasta que los jesuitas resaltaron sus atributos medicinales y de sustituto nutricional: los mitayos que la mascaban rendían el doble en el trabajo, y podían prescindir por varias horas de la ingestión de alimentos (Ibid).

La valoración y los discursos con relación a la coca –en el ámbito internacional– variaron a lo largo del tiempo al ritmo de los cambios en la estructura social y normativa de las sociedades. De la “época dorada” –que acompañó el proceso de *laissez-faire* y medicalización de la

sociedad desde principios del siglo XIX– se pasó a la prohibición, impulsada en Estados Unidos por el movimiento puritano, que inició una cruzada moral contra las drogas, llegando a promocionar acuerdos internacionales para regular su producción y comercialización (Argandoña, 2002).

Luego de una serie de intentos, fue en el marco del Convenio de Ginebra de 1936 –“Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas”– que se impuso la aceptación internacional del modelo represivo defendido por Estados Unidos (Ibid). Luego, otros convenios irían perfeccionando la legislación con relación a la fabricación, distribución y consumo de estupefacientes, como el elaborado por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, reunida en Nueva York; y más recientemente la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, reunidas en Viena.

La antigüedad de este producto natural del subtrópico de los departamentos de La Paz y Cochabamba se remonta a los tiempos precolombinos, y es corrientemente utilizado en medicinas y rituales por los pueblos andinos; el hábito del *akulliku* o *pijcheo* se ha mantenido a lo largo del tiempo, especialmente entre los sectores populares. En el caso andino, esta práctica ancestral –succión de una bola de hojas de coca insalivadas que se mantiene en la boca como un estimulante suave y no adictivo– derivó en grandes debates, iniciados en ámbitos académicos peruanos, acerca de los efectos de estas prácticas –asociadas en muchos casos con la “degeneración racial de los indios”– , y la discusión acerca de los efectos de la coca en la salud continuaron por largo tiempo. Incluso representantes teóricos del indianismo boliviano condenaron a la coca. Uno de sus principales exponentes, Fausto Reinaga (1969:100,127), advierte que “la Biblia predicada por la ‘fiera blanca’ le ha caído al indio peor que la coca y el alcohol”, e inserta a la coca en la matriz de opresión que padecen los pueblos originarios: “la coca que masca el indio, que masca el niño indio, que masca el anciano, la coca que mascan indias e indios es la sustancia que anestesia, que adormece el hambre del indio”²⁶.

En la década del setenta se asistirá a una segunda “época dorada”, esta vez a partir del incremento de la demanda de clorhidrato de cocaína, principalmente en los países desarrollados; lo que incrementó los cultivos de coca en la región andina y la aparición de redes que luego serían conocidas como “carteles”, especialmente en los países donde se procesaba la coca para obtener la pasta base y luego el clorhidrato de cocaína (Argandoña, 2002). Bajo la dictadura de Banzer (1971-1978) se liberalizó el cultivo de coca, y su transformación en cocaína tuvo un fuerte impulso desde las esferas estatales, un negocio continuado por el también golpista Luis García Meza (1980-1981) (Ballesteros et al, 2001:32-33)²⁷. En los años ochenta, la administración conservadora de Ronald Reagan inició una renovada “guerra contra las drogas” que pronto traspasó las fronteras estadounidenses y se centró en la erradicación de la oferta, en este caso de la coca; en paralelo a su criminalización discursiva. Su correlato fue la militarización de la lucha contra las drogas, la implementación de políticas coercitivas para la erradicación de la coca excedentaria, y una creciente intromisión de Estados Unidos en la política interna de los países andinos, entre ellos Bolivia (Plan Colombia, Iniciativa Andina, políticas de certificación y des-certificación como condicionalidad para el otorgamiento de préstamos y ayudas económicas, etcétera).

La Ley 1008 –Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas– del 19 de julio de 1988, constituye el marco legal que regula las políticas estatales frente a la coca, sobre la que se sustentaron posteriores políticas gubernamentales como El Plan de Acción Inmediata Opción

Cero (1994), o el Plan por la Dignidad (1997). A los efectos de nuestra investigación nos interesan especialmente las normativas de la Ley 1008 referidas a la hoja de coca en “estado natural”, diferenciada de la coca “iter criminis”, que es la coca en proceso de transformación química, que aísla el alcaloide cocaína. El artículo 6º distingue la producción “necesaria” (para consumo y uso lícito definido por los artículos 4º y 5º) de la producción “excedentaria”, que sobrepasa tales requerimientos. A partir de estas especificaciones la ley delimita, en su artículo 8º, tres zonas de producción cocalera: a) zona de producción tradicional, b) zona de producción excedentaria en transición y c) zona de producción ilícita²⁸.

A diferencia de otros países andinos (Colombia), el artículo 18º establece que la erradicación de cultivos será realizada a través de “métodos manuales y mecánicos, siendo prohibida la utilización de medios químicos, herbicidas, agentes biológicos y defoliantes”. La coca necesaria para cubrir la demanda interna se establece en el equivalente a la producción de un área de 12 mil hectáreas de cultivo, teniendo en cuenta el rendimiento en la zona tradicional (artículo 29º). En todas las zonas queda prohibida la ampliación de cultivos. La ley establece que el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos de coca estarán dirigidos principalmente a beneficiar al pequeño productor de coca de las zonas a) y b) establecidas en el artículo 8º; a través del cambio de los patrones productivos agropecuarios, la asistencia crediticia, el desarrollo de la agroindustria y el fortalecimiento de los sistemas de comercialización y articulación territorial de las regiones afectadas. Este proceso será programado por el Poder Ejecutivo, en coordinación con los productores de coca, con el objetivo de reducir los volúmenes de producción excedentaria (artículo 21º).

Y el artículo 22º agrega que toda sustitución de cultivos de coca será planificada en forma gradual, progresiva y simultáneamente a la ejecución de los programas y planes de desarrollo socioeconómico sostenido a ejecutarse en las zonas de producción a) y b) definidas en el artículo 8º. Estos planes deberán incluir la búsqueda y obtención de mercados internos y externos para las producciones alternativas. Sin embargo, G. Argañarás (2001:18) sostiene que el desarrollo alternativo ha fracasado, ya que siempre ha consistido en programas pilotos, programas donde gran parte del dinero se ha quedado en estratos técnicos y burocráticos; y por su parte Mario Argandoña (2003) advierte que “el único indicador del éxito del programa es la disminución de los cultivos y no el desarrollo regional, que supondría un proceso mucho más complejo y acuerdos que irían más allá de erradicar la coca”. En el mismo sentido otros analistas, miembros del Área Coca, Drogas y Desarrollo del CEDIB, señalan que

“El desarrollo alternativo es asumido por las agencias de cooperación europeas, las Naciones Unidas y la ayuda norteamericana. En su aplicación apenas intervienen los habitantes y menos sus organizaciones sindicales y su aplicación está ligada a programas represivos de erradicación. No se buscan mercados para los productos sustitutivos propuestos por técnicos extranjeros. No se desarrolla suficientemente la infraestructura productiva del Chapare. En general el monto invertido no cubre ni la décima parte del capital que movía la producción de coca”²⁹ (Ballesteros et al, 2001:31; ver también Spedding, 2003:19-22).

La socióloga Silvia Rivera, especialista en la temática de la coca y participante de las mesas de diálogo entre el gobierno y los cocaleros, afirma que “el desarrollo de las regiones productoras no puede ser ‘alternativo’ a la coca, pues no existen alternativas ecológicas, económicas y culturales que permitan sustituir este producto [...] el desarrollo sin coca empobrece a los campesinos y les priva de salidas económicas estables y de largo plazo” (Rivera, 2003:8). Destaca los límites impuestos por las convenciones internacionales a la posibilidad de “incursionar en mercados modernos y de exportar coca legalmente al mercado mundial” (Ibid:7), ya que los criterios que autorizan –limitadamente– los usos tradicionales

parecen presumir que el “consumidor es un indígena arcaico y en vías de desaparición”. Por su parte, la antropóloga británica –y productora de coca sindicalizada en los Yungas– Alison Spedding discute con amplitud el concepto de “zona tradicional” contemplado en la Ley 1008, y se pregunta si lo tradicional está asociado a una determinada región geográfica, o un productor “tradicional” es aquél que puede demostrar su pertenencia a un grupo social que se ha dedicado a la producción de coca desde que se tiene registro de ellos. Los diferentes criterios que se tomen van dejando alternativamente afuera y adentro de las “zonas tradicionales” a diferentes regiones de la geografía cocalera boliviana (ver Spedding, 2003; y para un estudio etnográfico del cultivo de coca en la región de los Yungas, Spedding, 1994).

Pese a la resistencia campesina y a la resiembra, según informes del gobierno estadounidense “los cultivos de coca en Bolivia son aproximadamente la mitad de lo que eran en su momento máximo en 1995, habiéndose reducido de 48.600 hectáreas a 24.400 en 2002”. Aunque, “debido a la fuerte y violenta oposición cocalera, tanto este como el anterior gobierno no tuvieron la suficiente determinación para implementar la erradicación forzosa en los Yungas”³⁰. Según el “Plan Bolivia, un nuevo compromiso 2003-2008” existen 3.500 has. por eliminar en la región de los Yungas de La Paz y 6.000 has. en el Chapare, en el subtrópico de Cochabamba. Sin embargo informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen le otorgan a Bolivia un lugar “casi marginal” en el suministro mundial de cocaína (con menos de un décimo de la producción mundial) (*La Razón*, La Paz, 27-6-2003).

“Causachun Coca!, Wañuchun yanquis!”: repertorio de acción colectiva y producción de sentido

Las organizaciones cocaleras han logrado convertirse, desde fines de los años ochenta, en uno de los componentes más activos de la lucha social en Bolivia y uno de los sectores que más contribuyeron a revitalizar y fortalecer el movimiento sindical campesino. Esta emergencia como movimiento social se vincula principalmente a la “intromisión” del Estado boliviano (y de Estados Unidos) en su actividad productiva –en el marco de la “lucha contra el narcotráfico”–, mediante planes de erradicación forzosa y desarrollo alternativo que restringen la “libertad de mercado” promovida por la letra del neoliberalismo. Frente a ello, las huelgas de hambre, los bloqueos de caminos, las manifestaciones y las largas marchas han sido constantes desde mediados de la década del ochenta, en el marco de la “la inestabilidad de los acuerdos, la posibilidad [siempre latente] de reanudación de los conflictos, el incumplimiento de los convenios y la desconfianza en los procesos de negociación” entre el gobierno y los cocaleros (Camacho B., 1999:8).

Los bloqueos de caminos –con capacidad para incomunicar a la región andina con el Oriente boliviano, mediante el bloqueo de la carretera troncal Cochabamba-Chimoré-Santa Cruz en el Chapare, o el acceso al Norte de La Paz a través de los bloqueos en los Yungas– y la confrontación con las fuerzas policiales y militares erradicadoras, han resultado en poderosas demostraciones de fuerza y capacidad de movilización e imposición, que desafían el principio de autoridad y soberanía estatal³¹. Pero sin duda una de las rutinas más eficaces de los cocaleros como mecanismo de sensibilización han sido las marchas de grandes grupos poblacionales hasta la sede del gobierno en La Paz, que a través de la explicitación del espíritu de sacrificio y del cuerpo social en movimiento, junto con la eficacia de su resistencia, han logrado visibilizar un conflicto desarrollado al interior del Chapare (y los Yungas) y obtener un fuerte apoyo social.

Al igual que los mineros a mediados de los años ochenta y los indígenas del Oriente, los cocaleros han concebido a la marcha como un recurso desesperado de *revelación* del grupo social en tanto colectividad, que –haciendo uso del propio cuerpo y autoimponiéndose una serie de penalidades– busca la congregación de la solidaridad ciudadana a través de dos formas de interpelación: apelando a los sentimientos humanitarios de la gente (a partir del deterioro de los marchistas por los días de marcha o los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad); y al mismo tiempo, a los sentimientos de solidaridad político-ideológica por medio de la interpelación discursiva (Camacho B., 1999:15-17). El nombre mismo con el que es bautizada cada marcha identifica un cierto tipo de interpelación³². A diferencia del efecto, más limitado, del “autosacrificio” en la huelga de hambre o en las crucifixiones, con esta rutina de acción colectiva es posible llegar a un público más amplio, en parte gracias a la atracción que este “espectáculo” genera sobre los medios de comunicación durante varios días, al tiempo que las tensiones operadas a lo largo de la travesía –generalmente a partir de los intentos del gobierno de evitar que las marchas lleguen a la sede del gobierno– permiten conservar la atención de la prensa y construir una narrativa de lucha y resistencia que potencia los efectos señalados.

Coca, significantes y significados

Uno de los principales hitos en este recurso de acción colectiva fue la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional, acontecida entre fines de agosto y septiembre de 1994, poco después del inicio del plan de erradicación forzosa "Opción Cero" (implementado luego de la visita del Zar Antidrogas Lee Brown a Bolivia), que logró movilizar a tres mil campesinos que durante veintidós días recorrieron 620 kilómetros entre Villa Tunari y La Paz, sorteando los obstáculos y la represión organizada por el gobierno de Sánchez de Lozada.

Las amenazas del líder de los cocaleros, Evo Morales Ayma, de pasar a la clandestinidad, los enfrentamientos entre comités de autodefensa y militares erradicadores, y los fuertes bloqueos de caminos protagonizados por los cocaleros –con apoyo de la COB y otras organizaciones sindicales– fue crispando el clima político desde abril de 1994, en el marco de un incremento de las actividades de erradicación, y una creciente militarización (Contreras B., 1994). Las acciones represivas del gobierno fueron complementadas con una estrategia de soborno y cooptación de algunos dirigentes para debilitar a los principales líderes del movimiento, sembrando la sospecha de su relación con el narcotráfico³³. La respuesta cocalera a la escalada represiva llegó el 8 de agosto, en medio de un estado de sitio *de facto*. Burlando a las patrullas policiales, y a escasos metros del cuartel de Chimoré (en el Chapare), más de 10 mil productores de coca de las cinco federaciones del Trópico (Centrales Unidas, Yungas del Chapare, Trópico, Carrasco Tropical y Chimoré), representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) decidieron emprender una marcha hacia la sede del gobierno, a la que luego se sumaría la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS), y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), además de representantes de organizaciones de derechos humanos y de la Confederación Universitaria Boliviana (Ibid). En un ambiente cada vez más tenso un 'ampliado' (congreso) de emergencia en Quillacollo decidió iniciar la marcha el 29 de agosto. Un día antes de esa fecha, diez agentes de civil apresaron a Evo Morales en Sacaba, cuando se trasladaba al trópico.

El día fijado, al grito de *Causachun Coca! Wañuchun yanquis!* (Viva la coca, fuera los yanquis) –y desafiando las amenazas del gobierno– comenzaron la caminata, cuyo eje reivindicativo se articulaba en torno al rechazo a la Ley 1008, el reclamo contra la militarización

del Chapare y el retiro de la DEA (ver Contreras B., 1994:38); a lo que se agregó la libertad de Evo Morales y los demás detenidos. El conocimiento del territorio (la “transformación de la geografía en poder”, en términos de Zavaleta) por parte de los marchistas fue un elemento decisivo frente a los infructuosos intentos oficiales de evitar el avance de la marcha mediante la movilización del ejército y la policía. En palabras de Juana Miranda, cocalera de Carrasco Tropical:

“Cuando partimos de Villa Tunari, nos han detenido los leopardos [militares], por aire y por tierra nos han reprimido, pero hemos seguido. Como el presidente nos engaña igualito lo hemos hecho nosotros, hemos aparecido desde el monte, por nuestros caminos hemos avanzado y después nuestras compañeras se han ido a enfrentar a la policía para que nosotros podamos reiniciar la marcha. Todo estaba planificado, era un gran secreto, porque sabíamos que el gobierno a toda costa quería detenernos” (Ibid: 56-57)

Su llegada a La Paz –por “camino secretos” y con el apoyo de las poblaciones campesinas, coreando consignas como “fusil, metralla, la marcha no se calla” o “con bombas, con gas, la marcha está en La Paz”– representó un duro revés para el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El apoyo social recibido por los marchistas impactará fuertemente en la lucha simbólica y discursiva que forma parte de la guerra de baja intensidad contra la coca.

El movimiento cocalero fue logrando –mediante una eficaz batalla simbólica– inscribir sobre la superficie discursiva de un espacio político una serie de significados que le han permitido pasar de expresar los intereses sindicales económicos-corporativos de los cultivadores de coca, a articular parcialmente una voluntad nacional-popular que interpela al modelo económico e institucional vigente en el país desde 1985; y –en virtud de una suerte de “memoria larga”– a la propia historia de dominación y exclusión heredada del período colonial. Uno de los éxitos de las organizaciones cocaleras consistió en enfatizar la dimensión identitaria y ritual de la hoja de coca para las culturas andinas; y –a través de la popular consigna “La coca no es cocaína”– combatir la estigmatización de su cultivo.

Mediante una operación hegemónico-discursiva el significante *coca* –asociado por los gobiernos boliviano y estadounidense con narcotráfico y cocaína– fue progresivamente resignificado como “hoja milenaria heredada de nuestros antepasados” y, fundamentalmente, “defensa de la dignidad nacional”; convirtiendo al discurso en defensa de la coca en una superficie de inscripción para el creciente cuestionamiento a la subordinación nacional a los mandatos de la embajada estadounidense, cuya abierta intervención en los asuntos internos de Bolivia asume características imperiales. La hoja de coca se transformó en gran medida en “la bandera de unidad y lucha de todos los explotados y oprimidos de nuestro país” (ASP, 1997), pese a que los cocaleros no representan más que una pequeña proporción de la población. Por otra parte, la incorporación de símbolos tradicionales como *pututus* y *wiphalas*³⁴, o la frase incaica *ama suwa, ama llulla, ama qhilla, ama llunk'u* en las movilizaciones cocaleras, dan cuenta de la andinización o wiphalización de su discurso. A la vez que la coca como recurso natural “de interés estratégico” permite una cierta recuperación –selectiva– de la retórica original del nacionalismo revolucionario (Argandoña, 2002), sólo que ya no se trata de la plata o el estaño, sino de la hoja “sagrada”.

De esta forma los cocaleros han sido capaces de articular una serie de alianzas que pusieron a la defensa de la coca en el centro de las luchas sociales y políticas del país, y les permitieron hegemonizar una amplia serie de demandas contra el modelo neoliberal; al tiempo que incrementaban su participación en los foros y congresos internacionales “anti-globalizadores” (Foro Social Mundial, congresos campesinos, Campaña Continental contra el ALCA, etcétera).

La empresa política del MAS: solidaridades, antagonismos y oportunidades

Globalmente, la emergencia del MAS-IPSP es difícilmente desligable de la ruptura del “equilibrio moral”, producto de más de una década de neoliberalismo, y de siglos de prácticas coloniales. Y junto con ella el fuerte cuestionamiento a la incapacidad de las élites para ejercer la *dirección intelectual y moral* de la sociedad luego del fracaso de los sucesivos proyectos “modernizadores”, cuya última expresión fue la Nueva Política Económica (de corte neoliberal) impulsada a partir de 1985. Asimismo no es comprensible lo ocurrido desde mediados de los años noventa sin tomar en cuenta la “irradiación” de las formas organizativas e ideológicas del sindicalismo obrero –especialmente a partir de la crisis minera– a las zonas de colonización más reciente, que transmitieron una experiencia acumulada y contribuyeron a politizar reivindicaciones de carácter económico-corporativo.

Al mismo tiempo, otros factores –de carácter más o menos coyuntural– intervinieron en el clima de “disponibilidad política” del que se benefició el MAS (incluso más allá de sus propias expectativas): a) la reinención de una narrativa de corte étnico que retoma las tesis del colonialismo interno (cuya difusión se debe en gran medida al liderazgo de Felipe Quispe en la CSUTCB); b) el creciente sometimiento del Estado boliviano a los dictados de la embajada estadounidense –especialmente en la cuestión de la erradicación de la coca– que creó un clima *antiimperialista* que recorrió transversalmente a diferentes sectores de la sociedad; c) el rechazo a los partidos políticos tradicionales, común a otras naciones del continente, especialmente en la región andina; d) la pérdida de capacidad articuladora del nacionalismo revolucionario entre los diferentes grupos sociales; e) el espacio “vacío” dejado por la profunda crisis de experiencias neo-populistas como el partido Conciencia de Patria (CONDEPA) –y en menor medida la crisis de Unidad Cívica Solidaridad (UCS)– especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto; f) los efectos político-sociales del Plan Dignidad, que aumentó la violencia del conflicto cocalero y golpeó duramente a la economía del Chapare, con un efecto multiplicador negativo sobre toda la región cochabambina; g) la Ley de Participación Popular y la introducción de las diputaciones uninominales (reforma del Artículo 60 de la Constitución Política del Estado), que mejoró la estructura de oportunidades políticas para el MAS-IPSP, al permitirle acceder a varios gobiernos municipales, especialmente en la región cocalera del departamento de Cochabamba, y cargos legislativos nacionales; h) y *last but not least*, la irrupción democratizadora de los movimientos sociales, cuyas expresiones iniciales fueron –como hemos mencionado– la guerra del agua en Cochabamba en abril de 2000, y el ciclo de bloqueos aymaras del altiplano, entre abril y septiembre del mismo año.

“Votar por nosotros mismos”: la Tesis del Instrumento Político de las organizaciones sindicales

“No existe el pacto o acuerdo constitutivo y sin eso la democracia se vuelve una discusión de abogados sobre un contrato que no existe” (Zavaleta, 1983:16).

Zavaleta ya advertía que “la institución democrático-representativa no contiene de modo alguno los mismos significados en sociedades homogéneas (como Estados Unidos) que en sociedades abigarradas o heterogéneas” como la boliviana (1983a:228). El constante desacuerdo entre la manifestación democrática y la determinación real del poder (falta de espacios de consenso y articulación) deriva en gran parte de la primacía del dogma precapitalista de la desigualdad por sobre el prejuicio capitalista de la igualdad; y “no se pueden llevar cuentas [cuantificar uniformemente voluntades políticas] allá donde los hombres no se consideran iguales unos de otros” (Zavaleta, 1983:15). Los recurrentes “agujeros” hegemónicos han erigido a la práctica del

golpe de Estado como la “forma incorporada o corriente de cambio político en el país” (Zavaleta, 1983a:234) hasta 1982.

La debilidad de la articulación hegemónica promovida por el ideologuema nacionalista revolucionario –la mayor experiencia articuladora de la historia boliviana (Antezana, 1983)– transformó en gran medida a la historia de Bolivia –desde los años cuarenta– en la historia de una enemistad entre el ejército y las masas populares, lideradas por el movimiento obrero minero; y la prebenda y la violencia política intentaron sustituir esta “atrofia hegemónica”. Aun hoy –después de más de dos décadas de democracia representativa– diversos principios de autoridad y soberanía –sustentados en lógicas sindical-corporativas– desafían y compiten con el monopolio de la fuerza estatal. Y la consolidación de los movimientos sociales (y comunitarios), de sus propuestas políticas y su impacto en las decisiones es indesligable de la contundencia y densidad de medidas de presión como los bloqueos, las largas marchas y la confrontación con los cuerpos policiales y militares (G. Linera, 2001)

En Bolivia la superioridad del sindicato sobre el partido, irradiada desde el movimiento obrero minero (y fortalecida por las políticas del Estado Nacionalista)³⁵ ha marcado la lógica organizativa del movimiento campesino, especialmente desde los años cuarenta. Los sectores subalternos son en primer lugar clases “sindicalistas”, en la medida en que su *acumulación en el seno de la clase* se da primariamente a través de la forma sindicato; por ello este concepto reenvía –a lo largo de la historia boliviana– a organizaciones más complejas y extensas que el sentido corriente del término (Zavaleta, 1983a:232-3). En el caso de los campesinos, detrás del nombre “sindicato” se “ocultan” instituciones que en muchos casos se superponen con las instituciones originarias (*ayllus*), y corrientemente constituyen organismos de poder con funciones estatales en las comunidades (ver Gordillo, 2000; Lagos, 1997), maquinarias territoriales, sociales y ahora electorales.

La Tesis del Instrumento Político se inserta plenamente en esta tradición de acumulación político-social, al tiempo que presenta una importante carga de renovación. Las imágenes de las injusticias padecidas por los pueblos indígenas, la reivindicación de su stock civilizatorio y la narrativa de autodeterminación, se combinan con la pretensión de articular a diversos sectores sociales en un proyecto emancipatorio común. A diferencia de intentos iniciales más radicales, como la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias³⁶ (o experiencias actuales en el Altiplano, como Achacachi), el instrumento político hegemónico por los coccaleros no se basará en el autogobierno o el “poder indio”, sino en fórmulas que apelan con mayor fuerza a lograr el reconocimiento de lo indígena dentro del Estado boliviano, asumiendo los procesos de mestización que dan cuenta de lo popular en el país, y presentando una visión más “digerida” del indianismo radical (su posición frente a la participación electoral y las instituciones representativas ilustra alguna de estas características, no exentas de tensiones). David Choquehuanca confiere un papel simbólico importante al contra-festejo de los 500 años del “descubrimiento” de América en este nuevo ciclo de “toma de conciencia” indígena:

“La campaña 500 años de resistencia ha significado para nosotros un despertar, un despertar de interpelación hacia nosotros mismos. Nos hemos preguntado con la campaña 500 años de resistencia: ¿quiénes somos?, con la campaña de 500 años hemos abierto los ojos [y] la clase dominante se ha asustado; en 1992 hemos organizado una movilización de más de 70 mil hombres y mujeres aquí en La Paz donde no había ni una bandera boliviana, eran puras *Wiphalas*. Hemos dicho ‘500 años nos han explotado, 500 años nos han humillado, 500 años nos han pisoteado, 500 años nos han marginado, por lo menos que este día nos respeten’” (David Choquehuanca, entrevista, La Paz, junio de 2003).

El salto cualitativo y novedoso en la creación del Instrumento Político se produjo en 1995, cuando los cocaleros ya habían consolidado una fuerte presencia política en el movimiento campesino. En marzo de ese año, el Primer Congreso Tierra y Territorio –del que participaron la CSUTCB, la CSCB, la CIDOB, la FNMCB-BS–, aprobó la Tesis del Instrumento Político, que consistía en fundar un movimiento organizado como extensión de las instancias sindicales campesinas, que venían protagonizando grandes movilizaciones en defensa de la tierra, el territorio y contra la erradicación de los cultivos en la región del Chapare, el lugar con mayor represión de las fuerzas policiales bolivianas, con financiamiento y asesoramiento de la DEA y otras entidades estadounidenses³⁷.

A partir de esas resoluciones se puso en pie la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), presidida por el dirigente cochabambino Alejo Véliz, que –siguiendo las resoluciones de su II Congreso– se definió como

“Una opción revolucionaria y liberadora que nace del seno de los compañeros campesinos y oprimidos [que] con el transcurso del tiempo ha captado la adhesión de otros sectores, conforme a sus principios de Instrumento Político de los oprimidos y no sólo de los campesinos” (ASP, 1997).

De la nueva *síntesis* propuesta por la ASP, emerge la propuesta de una Bolivia Socialista, Multinacional y Comunitaria, resultante de la superposición de la “lucha nacional y lucha clasista”. Se define como el “nuevo sujeto de la Revolución” a “originarios, obreros y campo popular” y se propicia la articulación del Pachakuti andino, el marxismo y la idea de Tierra sin mal del Oriente boliviano, en una interpelación al conjunto de los explotados. Un proceso –que luego de divisiones internas, especialmente el alejamiento de Alejo Véliz– se materializará en el MAS-IPSP³⁸.

De esta forma los “partidos” emergentes del nuevo ciclo de luchas campesino-indígenas han nacido a partir de congresos sindicales de los movimientos sociales (cocaleros del Chapare y los Yungas, e indígenas del Altiplano) para conseguir proyección política y una prolongación parlamentaria de la acción colectiva (G. Linera, 2003). Las siguientes declaraciones seleccionadas definen la forma en que la “tesis” del instrumento político fue materializada en el MAS-IPSP, según dos de sus principales dirigentes:

“El MAS no tiene una estructura política partidaria, sino que las mismas estructuras del sindicalismo campesino e indígena son las estructuras del MAS, por tanto son esas mismas estructuras las que controlan; acá no se manejan las cosas verticalmente, no hay imposiciones. Los dirigentes principales deben cumplir lo que deciden las organizaciones sociales que componen el IPSP” (Evo Morales, entrevista, Buenos Aires, agosto de 2002).

“[El MAS] es un movimiento político que expresa las aspiraciones de las organizaciones sociales en su lucha por las reivindicaciones nacionales, y las de los sectores populares. La base orgánica está, precisamente, en las organizaciones ante las cuales las direcciones políticas y sus representantes públicos (concejales en los municipios, diputados y senadores) rinden cuenta de su actuación y reciben las directivas principales para su acción. Mediante congresos regionales y nacional se eligen las directivas en los niveles territoriales correspondientes. Como movimiento ligado a las organizaciones sociales, sus actuaciones son abiertas y éstas participan tanto en el control de las acciones de sus representantes, como en la elección de los candidatos a las elecciones” (Evo Morales, 2003, *Punto Final*, Sgo. de Chile, N° 537)

“El MAS no es un partido, es un conjunto de movimientos sociales, no queremos que sea un partido, con jefe, estatutos [...]” (Dionisio Núñez, Primer Ampliado de Evaluación de la Gestión Parlamentaria del MAS)

Estas gigantescas maquinarias sindicales y las organizaciones comunitarias han mostrado ser eficaces fuentes de “capital político”, con capacidad para disputarle los votos a los partidos tradicionales y modificar el escenario discursivo nacional, en un contexto en el que hacer

política electoral ha devenido un mandato de asamblea:

“Quienes han entrado a la campaña electoral han sido ellas [las organizaciones] sobre todo las centrales campesinas. En el Norte de Potosí el trabajo lo hicieron los ayllus, que operaron con el nombre de MAS. En el trópico cochabambino no es que gana el MAS, ganaron las seis federaciones [cocaleras], que son lo fundamental del instrumento político y que le dan a Evo Morales una victoria increíble” (Filemón Escóbar, 2002, *Pulso*, La Paz, N° 153)

En el Primer Ampliado de Evaluación de la Gestión Parlamentaria³⁹, se pudo observar – incluso en su “escenificación” física– el poder de las organizaciones sindicales que conforman el Instrumento Político, en línea con las palabras iniciales de Román Loayza (CSUTCB): “Este proyecto [el MAS-IPSP] ha nacido del seno de las organizaciones. Nosotros somos fruto de las organizaciones, que nos han parido”. En la mesa coordinadora estaban sentados los representantes de la CSUTCB⁴⁰; la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa (cuya secretaria ejecutiva –Leonilda Zurita– es también secretaria de Relaciones Internacionales del MAS); el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y la CPESC (Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz); además de Evo Morales como presidente del MAS. Distribuidos en sillas a lo largo y ancho del salón estaban los diputados, quienes debían informar a sus colegas –pero ante todo a las organizaciones– sobre la actividad parlamentaria desarrollada en el último año (desde julio-agosto de 2002). El responsable político del MAS en el departamento de La Paz, Jorge “Coco” Arzabe explicita esta hegemonía sindical-campesina en el Instrumento Político, con relación a sectores provenientes del medio urbano:

“En la dirección hay una hegemonía de los sectores campesinos (un eje aymara-quechua): cocaleros, campesinos indígenas del Altiplano y colonizadores. Esto lo estamos manteniendo para garantizar el espíritu ideológico, la estrategia política y la estructura orgánica. No queremos entramparnos en el populismo. Mucha gente está con la sana visión de cambiar, de transformar el país, pero otras personas tienen una visión muy corta, y sólo buscan un acomodo personal” (Jorge Arzabe, entrevista, La Paz, junio de 2003).

La inexistencia de un aparato burocrático, intelectual y administrativo separado del sindicato, es una de las características organizativas del MAS: “Donde las organizaciones sindicales funcionan bien [y adhieren al MAS] el Instrumento Político no existe por separado”, como por ejemplo en la mayoría de las seis federaciones cocaleras del Chapare (Evo Morales, Ampliado de Evaluación)⁴¹. No es extraño que surjan “desconfianzas” y tensiones entre el bloque parlamentario y las organizaciones sindicales. Frases como: “Las bases no estamos ejerciendo suficiente control sobre los diputados”, “cuando sale una convocatoria de las federaciones los diputados deben estar presentes”, junto con críticas a los diputados que no “bajan a informar a las bases” se pueden escuchar en congresos y reuniones políticas y sindicales⁴². Este “control” resulta más fuerte en el caso de los diputados uninominales –que a diferencia de los plurinominales– fueron elegidos por las organizaciones. Incluso se puede observar la supervivencia de cierta lógica clientelar “desde abajo”, a través de peticiones de las más diversas (camisetas de fútbol para el equipo de la comunidad, útiles escolares, resolución de problemas de infraestructura, etcétera) lo que parece diferenciarse de la relación jerárquica que normalmente caracteriza al clientelismo político; y podría interpretarse –provisoriamente– como cierta “reapropiación” por las organizaciones y comunidades del dinero percibido por los diputados⁴³, bajo una lógica comunal de soberanía *no* enajenada (ver Gutiérrez A., 2001a).

Esa temática fue abordada de forma crítica en el mencionado ampliado, donde algunos participantes señalaron que “muchos diputados van a sus comunidades sólo a entregar

camisetas”. Frente a ello Evo Morales señaló que “Debemos llenar los vacíos que tenemos: políticos, ideológicos y también de conducta ética [...] Hay que analizar la conducta de los legisladores no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista político-ideológico. [Porque] algunos sólo ven el tema económico”; y Dionisio Núñez destacó la necesidad de “educar a las bases en que no es función de los diputados atender rosarios de peticiones”, especialmente a partir de las próximas gestiones, y utilizar esos recursos en capacitación.

“Jichhapi Jichhaja!” (¡Ahora es cuando!): El desborde electoral de los movimientos sociales

Nos summus, nos existimus

La sigla de la ASP nunca obtuvo el reconocimiento de la Corte Nacional Electoral (CNE), por lo que la primera vez que el Instrumento Político se puso a prueba –en 1995– lo hizo en el marco de la alianza Izquierda Unida (IU) y obtuvo 49 concejalías y diez alcaldes, todos en Cochabamba. Luego –en 1997– Evo Morales fue elegido diputado uninominal con el 61,8% de los votos (un récord nacional). Pero en 1998 el “matrimonio” político entre Evo Morales y Alejo Véliz se rompió definitivamente, después de tortuosas disputas por el liderazgo campesino en Cochabamba⁴⁴, y Morales decidió embarcarse con la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS), esta vez ante las dificultades de lograr el reconocimiento electoral del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos; de allí la sigla MAS-IPSP⁴⁵.

Las elecciones presidenciales de junio de 2002 pusieron de relieve la crisis de legitimidad de la “democracia pactada” que imperó desde 1985; percibida cada vez más como “una impostura discursiva” (Gutiérrez A. y G. Linera, 2002:14), detrás de la cual las cúpulas partidarias tradicionales tejen versátiles alianzas para obtener la mayoría parlamentaria que les permita acceso al poder. La creciente brecha entre las siglas partidarias (MNR, MIR, MBL, etc.) –que incluyen significantes como “nacionalista”, “izquierda” o “revolucionario”– y los contenidos de las políticas aplicadas, ponen de relieve las transformaciones político-ideológicas de los partidos que se alternaron en el gobierno desde mediados de los años ochenta, y que adhirieron fervientemente a las recomendaciones de los organismos financieros internacionales.

Después de una década y media de hegemonía de los partidos tradicionales, dos figuras surgidas de la resistencia social contra el modelo neoliberal –Evo Morales y Felipe Quispe– fueron legitimados con un gran caudal de votos. Y de esa forma –relatan con ironía Guzmán y Orduna (2002a)– un “terrorista” (Quispe) y un “narcotraficante” (Morales), devinieron los protagonistas de la “fiesta democrática”. En el caso del líder del MAS, éste quedó a menos de dos puntos porcentuales del triunfador –Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR– quien fue finalmente elegido presidente por el Congreso el 6 de agosto de 2002⁴⁶.

Como señala Romero B. (2002:181) Evo Morales logró una alianza electoral inédita entre los campesinos, los habitantes de los barrios pobres de las ciudades y consistentes círculos de la clase media intelectual. Desde una intención de voto inferior al 5%, y ajeno a las técnicas del *marketing* electoral convencional, el MAS inició un acelerado crecimiento en el último mes y medio de campaña electoral, lo que combinó un apoyo rural (mal medido por las encuestas) con un apoyo urbano tardío. Por primera vez una organización de la izquierda radical alcanza un segundo lugar, con un porcentaje próximo al 20% (581.884 sufragios) y –también por primera vez– las ciudades se mostraron atentas a un movimiento encabezado por un líder campesino, aunque su implantación fue principalmente rural (Ibid:188). De esta forma la influencia del MAS se irradió desde su bastión (Cochabamba) hacia el norte de Chuquisaca, el norte de Potosí, el

este de Oruro y de La Paz, e incluso hacia el oeste de Santa Cruz, imponiéndose en las secciones con fuerte presencia de campesinos migrantes (Ibid).

El Altiplano paceño fue disputado con el MIP de Felipe Quispe, con fuerte arraigo en las regiones aymaras, y sus puntales fueron las zonas cocaleras del Chapare (registró casi el 80% en Villa Tunari), y los Yungas de La Paz, donde predominó un voto de características más corporativas. A ello se suma la victoria del MAS en Oruro, El Alto y barrios marginales como la circunscripción sur de Cochabamba, lo que muestra que, luego del retroceso posterior a la crisis de la UDP, la izquierda parece haber encontrado –al menos coyunturalmente– un discurso para reconquistar a sectores urbanos pobres y marginales. A la luz de los resultados Evo Morales y el MAS representan al mundo quechua de Cochabamba, Potosí, Oruro y parte de Chuquisaca, y a algunos segmentos del universo aymara radicados sobre todo en Oruro y, en menor medida, en los Yungas de La Paz (Böhrt I., 2002), lo que habla de la hegemonía electoral del MAS en el oeste del país (colla), y un desafío de extender su influencia al oriente (camba).

Siguiendo a G. Linera (2002) podemos afirmar que más que una derrota numérica de las élites dominantes, que no fue abrumadora, lo que se experimentó fue una derrota moral de las mismas, que en una sociedad racista como la boliviana pone en entredicho la certeza de mando inapelable y naturalizado que los grupos privilegiados han producido durante todo este tiempo. Permitiendo, al mismo tiempo, la recuperación del *logos* de quienes “se cuentan como incontados” (Rancière, 1996) y –como mencionamos– el consiguiente despliegue del litigio (la lógica de la igualdad de cualquiera con cualquiera) en el “orden natural” del neocolonialismo republicano.

La participación de Evo Morales en diversas movilizaciones sociales, especialmente en la “guerra del agua” en Cochabamba y tres fuertes bloqueos en el Chapare, le permitieron construir nuevas solidaridades y establecer una amplia red de contactos –incluyendo sectores urbanos–, que se tradujeron en la postulación de candidatos propuestos por las organizaciones sociales, y la inclusión de una amplia plataforma de reivindicaciones que incluía la rebaja de las tarifas de los servicios públicos, la reversión de los procesos de privatización y la preservación de los recursos naturales.

De esta forma ha ido emergiendo un movimiento, mezcla de izquierda rural y urbana, sindicalismo y etnia, capaz de articular un discurso anti-neoliberal y antiimperialista, e incorporar una visión étnico-cultural andina que interpela a otros sectores empobrecidos y marginados de la sociedad boliviana (Zegada, 2002:11). Pese a mantener formas de interpelación “populistas”, los nuevos liderazgos indígenas –como Evo Morales y Felipe Quispe– transformaron la lógica de la representación presente en recientes experiencias “populares”, como CONDEPA y UCS.

“Sin visa me siento más libre”: Evo como símbolo de la injusticia y la dignidad nacional

La expulsión de Evo Morales del Parlamento en enero de 2002 y sus enfrentamientos con el entonces embajador Manuel Rocha constituyen dos momentos en los que el antagonismo entre partidos tradicionales-sistema político-Embajada estadounidense y Evo Morales-MAS emerge con fuerza en la superficie, con un fuerte carácter simbólico que transformó su postulación en una suerte de candidatura “maldita”: mientras el “cocalero aguerrido” era desafiado por el representante del “imperio” (violando el protocolo diplomático), el “indio proscrito” por el sistema político era humillado por “políticos indecentes”, severamente cuestionados por la opinión pública. Por eso su desafuero –utilizando la pena máxima de “separación definitiva”– ha

sido leído por muchos bolivianos como “la separación sentimental de una Bolivia que tiene clausuradas sus aspiraciones de representación política, [y] que siente, con motivos, que los bloqueos son más participativos que la democracia” (Guzmán y Orduna, 2002). El propio Evo Morales buscó reforzar estas percepciones denunciando que se trató de “un juicio político contra aymaras y quechuas”.

Ambos hechos le proveyeron al MAS el referente simbólico necesario para lograr la adscripción política de una parte de las clases medias urbanas, más vinculadas a los procesos de individuación modernizante, y alejadas de las lógicas sindical-corporativas predominantes en el MAS (ver G. Linera, 2003). Y se fueron creando las condiciones que contribuyeron a transformar a Morales en un líder nacional, cuyo crecimiento desplazó a otros candidatos denominados “asistémicos” por la prensa boliviana (entre ellos, el ex juez Alberto Costa Obregón).

El dictamen en tiempo récord de la Comisión de Ética del Parlamento (72 horas) y el “consenso total” de los representantes de la “democracia pactada” (ADN, MNR, MIR, UCS y NFR) se basó en la acusación de que el diputado cocalero era el responsable intelectual de la muerte de cuatro uniformados en Sacaba. Pocos días antes, en ese poblado cochabambino, la reacción cocalera contra el Decreto Supremo 26415⁴⁷ –el entonces presidente (reemplazante de Banzer) Jorge “Tuto” Quiroga– se transformó en una sangrienta batalla de cuatro días contra las fuerzas policiales y militares, con un saldo de siete muertos (tres militares, un policía y tres cocaleros).

El clima anti-cocalero fue creciendo en paralelo al desafuero de Morales: un editorial del diario *La Prensa* (La Paz, 19-2-2002) habla de informes de inteligencia acerca de la presencia de “francotiradores extranjeros” (colombianos) en Sacaba y recuerda los “viajes a Cuba” de Evo Morales; y otro editorial del mismo diario (20-2-2002) vuelve a hablar de “sedición”, de “movimientos terroristas” infiltrados entre los cocaleros, y de la necesidad de “neutralizar a Evo Morales”.

Una fuerte campaña represiva siguió a las jornadas de Sacaba: la sede de la federación campesina del trópico –ubicada sobre la plaza Busch en Cochabamba– fue allanada por el Grupo Especial de Seguridad (GES) y 100 campesinos –entre ellos 21 dirigentes– fueron arrestados. Mientras tanto, la radio cocalera Soberanía –que funcionaba en Chipiriri– era clausurada, y sus equipos secuestrados. Con ello se continuaba una política de militarización del conflicto que, según informes de la Defensoría del Pueblo, provocó entre 1987 y 2002, 57 cocaleros muertos, 500 heridos de bala y 4 mil detenidos en celdas policiales sin el debido proceso; lo que llevó a los organismos de Derechos Humanos a hablar de una “violencia reactiva” por parte de los campesinos, frente a la militarización cotidiana de sus vidas⁴⁸.

Pero la “neutralización” de Evo Morales cuando estaba comenzando la campaña electoral para las presidenciales de 2002 le permitió al dirigente del MAS constituirse a un tiempo en el “enemigo número uno” del cuestionado sistema político boliviano y de la embajada estadounidense, favoreciendo la explicitación de antagonismos y –con ello– la polarización del campo político: “Me botó del Parlamento la clase política corrupta y decadente que representa al modelo económico y quiere hacer buena letra con la embajada de Estados Unidos”, “Quieren la muerte civil para Evo Morales”, “Para el gobierno y Estados Unidos Evo Morales es el enemigo número uno”, “Ante la embajada los diputados están en carrera para ver quién es más anti-Evo [...] los jefes partidarios venderían a su madre por la visa (estadounidense)”; fueron

algunas de las palabras –en muchos casos cargadas de ironía– con las que el dirigente cocalero respondió a su expulsión (*La Prensa, Pulso*, La Paz, 2-2002), la cual dio lugar a una huelga de hambre en el Congreso por parte de algunos diputados opositores, y a un ciclo de bloqueos y protestas que algunos medios denominaron “La guerra por Evo”; y que permitió reactualizar los lazos entre las organizaciones urbanas y campesinas que protagonizaron la Guerra del Agua en abril de 2000 (Coordinadora del Agua, regantes, transportistas, etcétera)⁴⁹.

Las posteriores declaraciones de Rocha contra la candidatura de Morales, en plena campaña electoral⁵⁰, fueron hechos que exacerbaban los sentimientos patrióticos y antiimperialistas de una gran parte de la población rural y urbana, y reforzaron el liderazgo del dirigente cocalero⁵¹. Mientras la mayor parte de los partidos tradicionales hicieron de la visa un requisito para ser candidato –en un contexto en el que la embajada estadounidense estaba procediendo a revisar los visados de unos 200 ciudadanos– Evo Morales declaró a la prensa: “Sin visa me siento más libre, más digno, más soberano” (*La Prensa*, La Paz, 15-2-2002) y se refirió irónicamente al entonces embajador estadounidense como “mi jefe de campaña”, preanunciando el efecto electoral positivo de las declaraciones de aquél sobre su candidatura presidencial.

Entre la nueva izquierda y el neopopulismo

El trabajo de Alenda M. (2002) acerca de la experiencia de CONDEPA aporta algunos elementos de análisis que permiten establecer continuidades y rupturas entre las formas de interpelación y liderazgo presentes en la “nueva izquierda” personificada en el MAS y las declinantes experiencias “neopopulistas”, que tuvieron un importante peso político entre los migrantes urbanos de origen indígena, cuyos procesos de individuación trancos (persistencia de las relaciones de compadrazgo, padrinzago, etc.) favorecieron la emergencia de liderazgos como el del “compadre” Carlos Palenque, quien desde su experiencia como comunicador social en RTP (Radio Televisión Popular) construyó una relación metonímica RTP=Nosotros (el pueblo, los pobres)=Carlos Palenque, luego prolongada a Pueblo=CONDEPA (Alenda M., 2002:89).

Esta “valorización de los desamparados” además de suscitar mecanismos de identificación gatilló un proceso de “liberación cognitiva desde arriba”, que conllevó un conjunto de transformaciones en la visión del mundo de los actores, tras las cuales “llegan a reconocerse derechos y a creer que pueden contribuir a cambiar el orden imperante” (Ibid: 88). Sin embargo, la eficacia de la interpelación condepista no radicaba en la “promesa de inversión del orden social en beneficio de los de abajo sino más bien en la integración simbólica de estos gracias a un símbolo clave de superación: una chola [Remedios Loza] que figura como primera candidata a diputada plurinominal para La Paz en 1989 y sale elegida” (Ibid: 89-90). De esta forma, se trata de un discurso que más que propiciar el fin de las desigualdades, “las vuelve superables” (Ibid: 93); “a pesar de su contenido igualitario, el discurso del compadre descansa en el tradicional esquema de dominación y lo refuerza [...] Carlos Palenque aparece como el protector indispensable de las mujeres de pollera que buscan elevarse socialmente” (Ibid:104). Una situación parcialmente similar se dio con la mencionada candidatura a vicepresidente de la República del aymara Víctor Hugo Cárdenas, promovida por el candidato del *establishment* Gonzalo Sánchez de Lozada. En ambos casos –más allá de las enormes diferencias que caracterizan cada liderazgo– el “hombre de empresa” aparece como un elemento esencial en la legitimación del indio, portador de una cultura aun no legítima *per se*.

En el caso de los nuevos liderazgos políticos –y nos interesa particularmente el de Evo Morales– podemos arriesgar que –a diferencia del fenómeno condepista– se trata de un proceso de liberación cognitiva *desde abajo*; en el cual los indios están a la cabeza de manera autónoma, y los liderazgos son construidos a partir de un largo proceso de ocupación sucesiva de cargos en el sindicato campesino, para luego ocupar posiciones en el Instrumento Político (IP), y, eventualmente, en el Parlamento⁵².

Pero, al mismo tiempo, la inexistencia real de institucionalización en el MAS y de mecanismos internos de expresión de mayorías y minorías, abona un sistema de toma de decisiones en las que el líder (y *árbitro*) se apoya alternativamente en coaliciones coyunturales e inestables (no en todas las discusiones “se invita” a las mismas personas); en cuyo poder y capacidad de persuasión sobre el líder intervienen capitales legítimos variados, que difieren según la temática en discusión: capacidad de movilización sindical-corporativa, capacidades discursivas, formación “técnica”, etcétera. Más que de fracciones se trata de grupos de presión informales (según proveniencia ideológica, relaciones personales, étnicas, etc.), que en un escenario gelatinoso, corrientemente no logran “solidificarse”. Más bien, diferentes clivajes operan (aunque no de forma lineal) al interior del MAS: indigenistas, (ex) izquierdistas provenientes del trotskismo, guevarismo, Partido Comunista, etc., clases medias urbanas, campesinos indígenas, bloque parlamentario, sindicatos campesinos⁵³. Todo lo cual reafirma el papel arbitral de Evo Morales como garantía de continuidad del MAS como una empresa política común⁵⁴.

De todas formas, no hay que olvidar que cuando se trata de posicionamientos políticos generales –o acciones como bloqueos, etc.– Morales “baja” a los congresos y amplios sindicales campesinos, actitud que sin duda encarna mucho más que una pose y representa una instancia de “confirmación carismática” (Weber, 1998:195). El encuentro *cara a cara* con las bases –al igual que con sus votantes– resulta clave en la construcción de liderazgo de Evo Morales; su vestimenta, vocabulario (y su constante victimización) constituye un (eficaz) intento de diferenciación con respecto a los “políticos tradicionales”, presentándose genuinamente como *uno más* entre sus compañeros campesinos, pese a haber ocupado espacios antes reservados a quienes poseían los beneficios de la distinción⁵⁵. Este ser *uno más* –un portavoz privilegiado de los campesinos que siempre vuelve a sus bases, y que se esfuerza por aprender para responder a sus actuales responsabilidades– le ha permitido a Evo Morales la producción de un “poder simbólico” al interior del sindicalismo cocalero (y desde allí al interior del Instrumento Político) a partir de la credibilidad, la confianza, el reconocimiento y la fidelidad de sus pares; y la constitución de una lógica de “inclusión-exclusión” sobre sus potenciales competidores internos (Ansart, 1983). La conservación de este poder simbólico es especialmente importante en el contexto de un movimiento concebido como una extensión de estructuras sindicales, con escasa institucionalización, y recorrido por numerosas fracciones internas (no formalizadas) cruzadas por la posesión de variados –y asimétricos– capitales sociales, escolares, culturales y étnicos.

“Somos pueblo, somos MAS”: interpelación discursiva y construcción de sujetos

“Hay un sentimiento nacionalista de dignidad. Las elecciones serán una pulseada entre la conciencia y la plata [...] Los pobres y los excluidos nos están permitiendo avanzar” (Evo Morales, Suplemento Domingo, *La Prensa*, La Paz, 2-6-2002).

Luego de los favorables resultados electorales, uno de los desafíos que afrontó el MAS fue la estructuración de una plataforma discursiva que a partir de cierto “cierre” ideológico le permita crear una *síntesis* coherente entre una relectura del pasado colonial y una propuesta de futuro

destinada a refundar el Estado boliviano, dejando atrás las relaciones de dominación racializadas que acompañaron toda la historia republicana y las relaciones de explotación inherentes al capitalismo. En un contexto de ambigüedad ideológica –propia de las organizaciones sindicales de las cuales es una “extensión”–, caracterizada por múltiples centros de emisión discursiva que no logran un “espacio de intersección” (Antezana, 1983), prevalece una interpelación (una suerte de “murmullo ideológico”) basada en la oposición al neoliberalismo y la defensa de la soberanía y la dignidad nacionales⁵⁶.

La propia dinámica sindical, que tiñe al conjunto de la actividad política del MAS, tiende a sobreestimar lo corporativo y debilitar la construcción de “miradas y referentes generales de articulación de la diversidad social, nacional y clasista de la sociedad” boliviana (G. Linera, 2003:4). Al tiempo que, en muchos casos, prevalece una suerte de “clientelismo popular” en detrimento de iniciativas de reforma “intelectual y moral” de la política y el Estado.

Pese a ello, puede observarse el intento –aún precario– de articulación de elementos nacional-democráticos (tendiente a recuperar el antagonismo social –corrientemente presentado por los sectores dominantes como mera “diferencia”–): una idea de nación plebeya (pueblo sencillo y trabajador, pueblos originarios, o simplemente “los pobres”), la defensa del territorio y la soberanía (centrada especialmente en la nacionalización de los recursos naturales: gas, petróleo y hoja de coca⁵⁷), combinada con una fuerte interpelación antiimperialista (fundamentalmente antiestadounidense) vinculada a la defensa de la “dignidad”⁵⁸.

Estos esfuerzos por superar lo sindical-corporativo se apoyan en gran medida en lo que Laclau denomina “lógica de la equivalencia”. Es decir, la conjugación de diversas demandas particulares en un sujeto colectivo a partir de la disolución de las diferencias (reivindicaciones particulares) en cadenas de equivalencias, representadas por “significantes vacíos” (significantes tendencialmente vaciados de sus significados particulares para asumir la representación de una universalidad que los trasciende) (Laclau, 1996: 69 ss)⁵⁹. De allí que el antagonismo pueblo=nación/oligarquía=antinación, propio del NR, esté presente en el discurso del MAS, aunque el pueblo no sea ya una “construcción” mestizo-criolla como la imaginaron los teóricos del NR (Montenegro, Céspedes), sino “originaria” y anticolonial.

En las reivindicaciones más vinculadas con su raíz “cocalera” se puede observar la rearticulación de un elemento del discurso neoliberal –la libertad de mercado (defensa del libre cultivo y comercialización de la hoja de coca)– en un discurso cuya característica principal es su frontal oposición al neoliberalismo. En parte ocurre algo similar con la “defensa de la nación” o la dignidad, que encontramos en el discurso del MAS, donde estos “núcleos comunes de sentido” (no clasistas) están ligados a campos ideológico-articulatorios distintos a los de del “nacionalismo burgués” (MNR de los años cuarenta/cincuenta). Recuperando al Laclau de los setenta (1986:186) podemos decir que es la “forma” que adquiere la articulación, más que su contenido, lo que determina el “carácter de clase” de su ideología; vinculada con los intereses de pequeños propietarios campesinos (y algunos comunarios) que hegemonizan, como hemos señalado, la dirección del MAS-IPSP.

El “derecho a gobernar esta tierra”, y que “el pueblo sea poder”, parten fundamentalmente de una contabilización numérica, que se expresa en el uso de la propia sigla partidaria en la consigna “Somos pueblo, somos MAS”. Esto difiere de la interpelación obrero-minera predominante hasta 1985, en la que la idea de que su trabajo y esfuerzo “sostenían” –

económicamente— al conjunto de la nación era la que les daba “derecho” a gobernar, pese a ser un grupo minoritario de la sociedad. Por otra parte, esta acepción “numérica” de la sigla predomina corrientemente sobre su “significado”, en el que figura el significante “socialista”, concebido más como una recuperación de las relaciones “protosocialistas” (de reciprocidad) aún vigentes en las comunidades-*ayllus*, que como una referencia a la tradición socialista de raíz marxista o socialdemócrata⁶⁰. No debemos perder de vista que el nombre —Movimiento al Socialismo— responde a una contingencia vinculada al no reconocimiento legal de la sigla IPSP (ver nota 45), y que el planteamiento original de la ASP de una Bolivia Socialista parece haber sido subordinado a la defensa de la “soberanía de los pueblos”. Y el rechazo al marxismo por encontrarse dentro “de lo occidental” no ha encontrado —hasta el momento— una estructura cognitiva capaz de reemplazarlo como interpretación de la realidad social boliviana, y como “mapa” para emprender una acción política transformadora y emancipatoria que opere sobre las relaciones sociales derivadas de un capitalismo dependiente y atravesado por formas de producción pre-capitalistas (de allí el concepto de *abigarramiento* expuesto precedentemente)⁶¹. Más bien, la radical ambigüedad discursiva del MAS (cuyos contenidos parecen negociarse día a día a partir de inestables “relaciones de fuerzas” internas) está dificultando su capacidad articuladora y debilitando el capital político derivado de su exitoso desempeño electoral.

A diferencia del MIP, el MAS no es portador de un discurso de autogobierno indígena; y sus apelaciones al “retorno al *Ayllu*” (o como dice la consigna: “Somos *Ayllu*”) no parecen uniformemente “adquiridas” al interior del movimiento. Algunos dirigentes matizan las apelaciones de los Principios Ideológicos que hablan —por momentos con tintes folclóricos— del regreso a una “sociedad fraternal de abundancia” y una economía de “reciprocidad y redistribución”⁶²:

“En aspectos básicos, estratégicos, [el discurso indigenista] tiene su peso, por ejemplo en el aspecto de la democracia. Frente a la democracia, como propuesta occidental, nosotros giramos un poco más en recuperar lo que es el consenso como método de decisiones comunitarias. Eso es una cosa que nosotros queremos rescatar y recuperar, lo mismo que los valores de la solidaridad, de la reciprocidad, de la armonía, que son cosas importantes para un proceso de cambio. Pero eso de volver por ejemplo al Tawantinsuyo o al *ayllu*, eso ya es discutible. Está bien como discurso, como ejemplo, pero volver al *ayllu* me parece personalmente imposible, porque estamos viviendo momentos mucho más avanzados en ciencia y tecnología, que hay que darle un contenido social” (Jorge Arzabe, entrevista, La Paz, junio de 2003).

La reivindicación de una Asamblea Popular Constituyente representa un eje importante en el discurso del MAS, entendida no como una mera reforma constitucional, sino como la materialización de una “nueva correlación de fuerzas” (Evo Morales, 2003, *Punto Final*, Sgo. de Chile, N° 537). Sin embargo la no puesta en práctica de los Comités de Defensa de la Soberanía en las ciudades (tal como se había propuesto en la pasada campaña electoral) y la falta de discusión en las bases de un proyecto de país alternativo, han hecho que esta propuesta haya perdido cierta fuerza como apuesta de transformación político-social.

Paralelamente, la prematura electoralización de la actividad política (con vistas a las elecciones municipales de 2004, como “trampolín” para las presidenciales de 2007) “puede inhibir los repertorios de acción colectiva que son los que en el fondo dieron lugar a este nuevo ciclo de resurgimiento de la izquierda” (G. Linera, 2003:4). Incluso varios dirigentes han destacado la falta de liderazgo del MAS en los movimientos que recientemente han emprendido acciones reivindicativas (generación *sándwich*, cooperativistas mineros), lo que puede tener un efecto potencialmente negativo en un movimiento que se piensa a sí mismo como una extensión política de las pulsiones de los movimientos sociales (incluso en el ámbito electoral). Al mismo tiempo que la consigna “con 35 diputados y senadores no alcanza, debemos ser

mayoría”, enarbolada frente al cerco parlamentario oficialista, evidencia las dificultades para hacer valer el hecho de ser la segunda fuerza parlamentaria, y una de las bancadas de izquierda más numerosa en América latina, aspecto que analizaremos en el siguiente apartado.

“¿Adónde está entrando señora?”: entre el corporativismo sindical-comunitario y la democracia liberal

“Detrás del orden calmo de las subordinaciones, detrás del Estado, detrás de los aparatos del Estado, detrás de las leyes, ¿no será posible advertir y redescubrir una especie de guerra primitiva y permanente?” (Foucault, 1996:44).

Gutiérrez A. (2001a:65) nos recuerda –siguiendo a Foucault– que “en los estados de dominación, el despliegue de la capacidad de ‘dirigir la conducta de otros’ no es un evento meramente ‘ideológico’, espiritual e intangible. [Sino que] los dispositivos de orden son los medios materiales, organizativos, culturales, y tecnológicos, a través de los cuales la dominación se ejerce de manera concreta, buscando restringir al mínimo cualquier posibilidad de autonomía del dominado”. De allí la necesidad de que las luchas de resistencia a la dominación adquieran un “carácter expansivo” –es decir, que cuestionen el hecho de que la capacidad de decisión misma ha resultado enajenada–, y la insuficiencia de “capturar” los dispositivos de orden para usarlos a favor de los dominados. Se trata más bien de erosionarlos, derogarlos, y levantar, al mismo tiempo, “nuevos dispositivos reguladores que no sólo consagren la nueva relación de poder, sino que anulen la conversión de las relaciones de poder en estado de dominación” y propicien mecanismos de autorregulación de dichas relaciones de poder (Ibid:65-66)⁶³.

Con el masivo ingreso de campesinos e indígenas a “jugar en una cancha ajena” (el Parlamento Nacional) varias de estas discusiones teóricas, en apariencia abstractas, han adquirido una renovada pertinencia. La decepción acerca de las posibilidades de transformación social –y en beneficio de sus comunidades– a través de las instituciones representativas, ha sido expresada por la mayor parte de los parlamentarios del MAS y del MIP –especialmente los indígenas– como balance de su primer año de gestión parlamentaria. A sólo un año de que su entrada al Parlamento atrajera la atención mediática y del resto de los diputados y senadores, cuando el eco de sus idiomas “originarios”, sus ponchos y polleras, y su encarnación de *lo* popular en el país, parecía recrear –en un ámbito fuertemente racializado– la diversidad multisocietal de la denominada nación boliviana.

Las expectativas iniciales pronto dieron lugar a una constatación empírica: el Parlamento –al igual que el resto de las instituciones estatales democrático-liberales– no es un espacio neutro de representación, tal como reza la letra del liberalismo, sino que se trata de un aparato *moldeado* organizativa, ideológica y culturalmente por los grupos dominantes, producto de un cierto orden social, de un “acto de fuerza fundador” que constituye el predominio de un grupo social sobre otros (Gutiérrez A., 2001a:72).

A diferencia de las “formas comunitarias de la política” –en las que el límite de la actividad de los representantes es la propia voluntad colectiva que controla materialmente los medios de dicha soberanía– en la forma liberal “la capacidad soberana que cada individuo detenta es cedida (intercambiada), total o parcialmente, para constituir un poder político que la deglute, una soberanía abstracta” (Ibid: 67). La combinación en la práctica de estas dos lógicas de soberanía política –y las estrategias que intervienen en cada una– no ha resultado fácil para los parlamentarios del MAS, que en gran parte fueron elegidos –y responden– a sus comunidades y, especialmente, a sus organizaciones sindicales. Sus capitales, útiles para organizar el curso de la decisión común en procesos de “autodeterminación social” (soberanía *no* enajenada)⁶⁴,

resultaron incapaces, hasta el momento, de disputarle el sentido de lo general, de lo nacional – en su propio “terreno”, el Parlamento– a los representantes de los partidos tradicionales, herederos de las élites económicas y políticas que construyeron las instituciones republicanas “a la medida” de sus capitales legítimos e intereses de clase.

Los dos principales dirigentes campesino-indígenas (del MIP y el MAS) se refieren así, en los testimonios seleccionados, a las tensiones entre estas dos lógicas de acción política, y más en general a las “dos Bolivias” que se enfrentan al interior de las instituciones representativas:

“Lo que pasa es que no pensamos como ellos, no comemos como ellos, no hablamos como ellos, no vestimos como ellos. Hay una diferencia tremenda, una contradicción, un choque de culturas: cultura política indígena frente a cultura política dominante liberal [...] El MIP tiene diputados que no están a la altura de otros que han estado años acá. Por eso tienen miedo a exponer sus ideas. Poco a poco se están familiarizando, hay que adaptarse a los horarios, a las nuevas formas de accionar. Para nosotros este es un nuevo escenario, una nueva forma de patear el tablero político-ideológico frente a los paradigmas neoliberales. Pero también estamos concientes de que por esta vía no vamos a cambiar nada [...] no estamos acostumbrados a estar acá adentro, sentados esperando. [Frente al ‘rodillo’ parlamentario] uno se pregunta: ‘habiendo masas ¿para qué voy a estar aquí adentro?’ Esta no es nuestra cancha, la nuestra es hacer movilizaciones, bloqueos, donde participan miles de comunarios” (Felipe Quispe, 2002, *Pulso*, La Paz, N° 164).

“Para mí el tema del voto pasa a un segundo plano, creo más en las luchas sociales, porque con las marchas y bloqueos cambiamos leyes, anulamos decretos, hacemos aprobar leyes [...] el Parlamento sirve por lo menos para ser expulsado y donde la gente puede tener idea de qué son los partidos tradicionales [...] Nosotros vamos con otra mentalidad, contra el modelo y el sistema, tal vez estando dentro del sistema [...] combinando la lucha parlamentaria con la lucha social” (Evo Morales, *La Prensa*, La Paz, 11-3-2002)⁶⁵.

A las formas de discriminación, derivadas del carácter racializado de la construcción del poder en Bolivia, se suma la posesión de capitales sociales, culturales, escolares y simbólicos cuya posesión o no determina la eficacia de la acción parlamentaria, el éxito o la futilidad de sus interpelaciones discursivas, y su visibilidad o invisibilidad intra y extramuros; que a través de los medios de comunicación, determinará la capacidad de crear “opinión pública”. Como nos recuerda Bourdieu (2001:11) las “relaciones de comunicación por excelencia, que son los intercambios lingüísticos, son también relaciones de poder simbólico donde se actualizan las relaciones de fuerza entre los locutores y sus respectivos grupos”, a partir de la posesión de ciertos capitales lingüísticos valorizados en un “mercado de bienes simbólicos” (Ibid:24). De forma tal que “los locutores desprovistos de la competencia legítima quedan excluidos de los universos sociales en que ésta se exige o condenados al silencio” (Ibid: 29).

El resultado para los diputados indígenas –carentes de estos capitales lingüísticos legítimos– fue la “invisibilidad” y la imposibilidad de imponer la más mínima agenda parlamentaria⁶⁶: el poder colonial –difuso en los distintos espacios de la vida social– sumado a los propios “complejos de inferioridad” promovidos por siglos de estigmatización y opresión, conspiraron contra el protagonismo indígena, contra la transformación del *factor indígena* en fuerza hegemónica: en sus discursos, en su capacidad interpelatoria en castellano, e incluso en la forma de ocupación física del espacio parlamentario⁶⁷.

Más bien, en el ámbito parlamentario parecen invertirse las relaciones de fuerza simbólicas que analizamos con referencia al ampliado de Cochabamba, y son los sectores medios urbanos quienes poseen mayor capacidad preformativa⁶⁸. Resulta claro que la lengua quechua o aymara adquiere un mayor valor en el mercado rural –donde sin duda contribuye a la formación de capitales políticos– que en el medio urbano, y especialmente en el Parlamento. No es difícil

percibir en la frase “¿Adónde está entrando, señora?”⁶⁹ ecos sutiles de viejas representaciones acerca de los indígenas y de su inclusión-exclusión en los diferentes espacios de la vida social, cuando los indios tenían prohibido circular libremente por las plazas y vías principales de las ciudades (Rivera, 1983)⁷⁰. Por eso su presencia en los curules y la imposición de un sistema de traducción simultánea (que se utiliza ocasionalmente) crea un escenario de lucha simbólica entre las prácticas señoriales de las élites blanco-mestizas y la presencia indígena-plebeya como un *otro* (portador de alteridad) que ocupa un espacio ajeno.

Recapitulando...

En las páginas precedentes abordamos un estudio de las características político-ideológicas y organizativas del MAS desde su fundación hasta 2003, y de su producción discursiva (en tanto práctica significativa), concientes de las dificultades de analizar una experiencia de construcción política en pleno desarrollo; procuramos realizar un recorte analítico que nos permita visualizar las lógicas en juego, su dinámica y las condiciones de su emergencia como un factor de primer orden en el escenario político nacional. Su exiguo tejido burocrático-institucional, la “informalidad” de muchas de sus prácticas, la gelatinosidad de sus agrupamientos internos y su escasa (y generalmente repetitiva) producción escrita conllevó que basemos nuestras indagaciones en entrevistas personales a informantes claves, revisión de prensa y observación directa de reuniones y congresos del MAS y de las organizaciones sindicales que lo componen.

Intentamos a lo largo de nuestro trabajo distanciarnos del “afán de novedades” que en ocasiones parece penetrar en el análisis político y social. No hay duda que la tesis del instrumento político supone un importante impulso renovador en una historia político-sindical campesina subordinada en gran medida al Estado nacionalista. La interpelación a “votar por nosotros mismos” plantea una forma novedosa de articulación entre las luchas sociales y electorales, luego de largos años en que obreros y campesinos votaban por diversas fracciones del MNR o planteaban el no juego en el terreno electoral; claramente *lo indio* se ha transformado en una importante fuente de capital político, posibilitando que de manera autónoma un campesino de origen aymara como Evo Morales se erija en jefe de la oposición y de la primera minoría parlamentaria. Por otro lado, las nuevas configuraciones sociales, producto de una década y media de reformas estructurales, han posibilitado la emergencia de nuevas formas de interunificación social, acción colectiva y producción discursiva.

Pero no es menos evidente que las nuevas tecnologías puestas en juego por los movimientos sociales tienen como condición material de posibilidad a las antiguas organizaciones sindicales corporativas, desde las cuales el movimiento campesino se enfrentó con la oligarquía y luchó por la tierra en los primeros años cincuenta, pactó con las fuerzas armadas restauradoras a mediados de los sesenta, impuso una nueva narrativa anticolonial y se articuló con el movimiento obrero en los setenta, y desafía hoy al trunco proyecto modernizador neoliberal⁷¹. Además, como hemos intentado mostrar, existe un “entronque” entre el nuevo nacionalismo indígena y el viejo nacionalismo boliviano (incluido el nacionalismo militar).

Frente a las polarizadas visiones actuales acerca de cómo “cambiar el mundo” el MAS-IPSP plantea sin fisuras la necesidad de transformar el poder conquistado por las organizaciones sociales en poder estatal. En un “devenir Estado” cuyas bases materiales pueden visualizarse en las funciones paraestatales que corrientemente los sindicatos campesinos –y las instituciones tradicionales (*ayllus*, etc.)– cumplen en las áreas rurales bolivianas desde los años cincuenta. A partir del nuevo ciclo de luchas iniciado en 2000 con la guerra del agua y los

cercos indígenas a la sede del gobierno la “lucha de clases” ha dejado de ser una lucha económica, de resistencia, y se ha convertido en una lucha política en la plena acepción de la palabra, en una lucha contra el poder y por el poder (Prada A., 2002a).

Como toda lucha hegemónica, su resultado no está inscripto de antemano. Que los nuevos grupos sociales logren transformar a las instituciones, o que la lógica de las instituciones consiga diluir, a través de la cooptación, la identidad de los grupos subalternos, dependerá de la lucha misma (Laclau, 1996:91-92). Es decir, de la capacidad de articulación, de la transformación del actual contra-discurso en propuesta alternativa de reorganización social y estatal a partir de la fuerza constituyente de los movimientos sociales. Y de la elaboración de una nueva *síntesis* de memoria y proyecto (Tapia, 2000:7) capaz de combinar instituciones modernas y tradicionales, en una perspectiva multinacional y multicivilizatoria que evite que las élites heredadas del poder colonial continúen ocupando ese “punto vacío de universalidad” del que hablábamos precedentemente.

Frente a la desidentificación nacional producto del neo-liberalismo, el MAS emerge como un nuevo nacionalismo indígena-plebeyo, que resignifica a la lucha nacional como una lucha por la tierra y el territorio, y pone en un lugar destacado la defensa de los recursos naturales, cuya dinámica ha dominado los enfrentamientos sociales en Bolivia a partir de 2000, desde la “guerra del agua” hasta la “guerra del gas”. Es, al mismo tiempo, un intento de articular a una multitud de sujetos, organizaciones y movimientos sociales en la que ningún sector es portador de privilegios ontológicos en la construcción de las nuevas identidades, por lo que las mismas son resultado de las luchas hegemónicas y articularias en curso. El precipitado –y como mencionamos, inesperado⁷²– crecimiento del MAS ha erigido a dirigentes sindicales, (ex)dirigentes de la izquierda urbana y campesinos e indígenas “del llano” en portavoces privilegiados de lo popular y plebeyo al interior del aparato estatal, sin haber elaborado aún estructuras discursivas capaces de articular la “diversidad” que prima en la construcción del Instrumento Político, y alumbrar una nueva identidad.

En términos estrictos el MAS no constituye una identidad, sino que agrupa numerosas identidades en su interior: autoadscripciones indígenas u “originarias” (aymaras, quechuas y en menor medida guaraníes u otros grupos étnicos del oriente boliviano); laborales (transportistas, gremiales, etc. que se incorporaron al MAS); o campesinas (cuyos orígenes se remontan a las luchas contra el sistema de hacienda, y en favor de la reforma agraria)⁷³. Los propios actores políticos que dan vida al MAS-IPSP no utilizan habitualmente el denominativo *izquierda* para definir sus identidades (ver G. Linera, 2003). Su agregación en un sujeto *popular* –pueblo sencillo y trabajador, e incluso empresarios nacionales o “patrióticos”– como bloque antagónico al orden establecido parece acercarse más a una interpelación de tipo populista que a las fórmulas interpelatorias tanto de las izquierdas tradicionales –sostenidas en la existencia de una clase “fundamental” cuya identidad se construye al nivel de la infraestructura económica– como de la *New Left* en países más institucionalizados.

No es la intención de este trabajo pronosticar futuros en sí mismos inciertos y sobredeterminados por la dinámica político-social. La propia historia boliviana está ahí para recordarnos las dificultades para dejar atrás sucesivos presentes de opresión neocolonial y encarnar un proyecto emancipatorio exitoso. Pero la misma historia nos habla también de una sociedad plebeya que –parafraseando a James Dunkerley– lleva la “rebelión en las venas”, y pese a las innumerables derrotas –con altos costos en vidas– parece renacer de sus cenizas e intentarlo nuevamente.

Poscriptum

Con posterioridad a la escritura de este artículo se sucedieron una serie de hechos que transformaron profundamente el campo político boliviano. La “guerra del gas” de octubre de 2003 –que provocó la caída y huida del país de Gonzalo Sánchez de Lozada con un saldo de más de 60 muertos– alteró las relaciones de fuerzas políticas y sociales en beneficio del bloque indígena-popular⁷⁴. El ciclo de protestas continuó con la crisis de mayo y junio de 2005, que potenció la demanda de nacionalización de los hidrocarburos en medio de las vacilaciones de el nuevo presidente, Carlos Mesa, quien se negó a promulgar la Ley 3058, una versión moderada del reclamo social. Esta crisis estatal pavimentó el camino para el triunfo electoral de Evo Morales el 18 de diciembre de 2005, clausurando la transición iniciada en 2003, y poniendo los cimientos de una nueva hegemonía indígena-popular. Está fuera de los límites de este artículo el análisis de esta nueva etapa, pero creemos que los elementos de análisis expuestos iluminan acerca de los orígenes de este proceso que ha proyectado a Bolivia en el escenario internacional como una de las experiencias más novedosas de cambio político y social.

Bibliografía

- Aboy Carlés, Gerardo 2001 *Las fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem* (Rosario: Homo Sapiens Ediciones).
- Aboy Carlés, Gerardo 2003 “Repensando el populismo” en *Política y Gestión* (Buenos Aires) Vol. 4.
- Albó, Xavier 2002 *Pueblos indios en la política* (La Paz: Plural Editores, CIPCA).
- Alenda Mary, Stéphanie 2002 “CONDEPA y UCS, ¿fin del populismo?” en *Opiniones y Análisis* (La Paz: Fundación Hanns-Seidel–Fundemos) N° 57.
- Anderson, Perry 1999 “Neoliberalismo: un balance provisorio” en *La Trama del neoliberalismo* (Buenos Aires: CLACSO-EUDEBA).
- Ansart, Pierre 1983 *Ideología, conflictos y poder* (México: Premia Editora).
- Antezana, Luis H. 1983 “Sistema y proceso ideológicos en Bolivia (1935-1979)” en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México: Siglo Veintiuno Editores).
- Argandoña, Álvaro 2002 *Coca, cocaleros y discursos en Bolivia* Tesis de Maestría (Cochabamba) mimeo.
- Argandoña, Mario 2003 “Futurología de la coca” (La Paz) en prensa.
- Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) 1997 *Resoluciones del II Congreso Nacional Ordinario* (Cochabamba). Mimeo, Biblioteca Chajra Runaj Masis (Cochabamba).
- Baczko, Bronislaw 1999 (1984) *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Ballesteros, Ignacio; Illanes, Cecilia y Suaznabar, Mirtha 2001 “Organizaciones sindicales de productores de coca. Compleja lucha de reivindicación y estigmatización” en *Boletín Internacional Acción Andina* (Cochabamba) N° 1.
- Bigio, Isaac 2002 “Bolivia: 1952-2002 ¿Entre dos revoluciones?” [on line] en *Globalización, Revista mensual de Economía, Sociedad y Cultura* Julio 2002 <<http://rcci.net/globalizacion/2002/fg264.htm>>.
- Böhrt Irahola, Carlos (2002) “Voto presidencial y voto uninominal en las elecciones de 2002” ;en: *Opiniones y Análisis* (La Paz: Fundación Hanns Seidel-Fundemos) N° 58.
- Bourdieu, Pierre 2001 (1985) *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos* (Madrid: Akal ediciones).
- Camacho Balderrama, Natalia 1999 “La marcha como táctica de concertación política (las marchas cocaleras de 1994 y 1995)” en Laserna, Roberto (coord.), Camacho B., Natalia y Córdova E., Eduardo *Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca* (Cochabamba: CERES-PIEB).

- Contreras Baspineiro, Alex 1994 *La marcha histórica* (Cochabamba: CEDIB).
- Chávez Walter 2003 "Bolivia, una revolución social democrática" en *Le Monde Diplomatique* (Buenos Aires) N° 53.
- Escóbar Álvarez, Federico 2000 "Participación ciudadana en los bloqueos de abril" en *Conflictos* Publicación del CERES (Cochabamba) N° 6.
- Espinoza, Claudia 2002 "Evo y Felipe, las diferencias" en semanario *Pulso* (La Paz) N° 151.
- Espinoza, Claudia; Guzmán, Gustavo y Vera, Christian 2002 "Discursos electorales prisioneros del 21060" en semanario *Pulso* (La Paz) N° 151.
- Estellano, Washington 2002 "Bolivia: la agonía del modelo" (La Paz) mimeo.
- Foucault, Michel 1996 *Genealogía del racismo* (Buenos Aires: Altamira).
- García Argañarás, Fernando 1993 *Razón de estado y el empate histórico boliviano:1952-1982* (Cochabamba: Los Amigos del Libro-Mala Yerba Editores).
- García Argañarás, Fernando 2001 (entrevista) "Análisis de la coyuntura Boliviana alrededor de la problemática de la coca" en *Boletín Internacional Acción Andina* (Cochabamba) N° 1.
- García Linera, Álvaro 2001 *La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la Minería Mediana (1950-1999)* (La Paz: Muela del Diablo Editores. IDIS-UMSA).
- García Linera, Álvaro 2001a "Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia" *Tiempos de Rebelión* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- García Linera, Álvaro 2002 "El Ocaso de un ciclo estatal" en semanario *Pulso* (La Paz) 19/07/02 <www.pulsobolivia.com>.
- García Linera, Álvaro 2003 "Radiografía de las nuevas izquierdas" en *Le Monde Diplomatique* (La Paz) N° 10.
- Gordillo, José María 2000 *Campesinos revolucionarios en Bolivia. Identidades, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba, 1952-1964* (La Paz: PROMEC-Universidad de la Cordillera-Plural Editores-CEP).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel 2001 "La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. A un año de la guerra del agua" en *Tiempos de Rebelión* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel 2001a "Forma comunal y forma liberal de la política" en *Pluriverso. Teoría política boliviana* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel y García Linera, Álvaro 2002 "El ciclo estatal neoliberal y su crisis" en *Democratizaciones plebeyas* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Guzmán, Gustavo y Orduna, Víctor 2002 "¿Se acuerdan de un tal Evo?" en Semanario *Pulso* (La Paz) N° 132.
- Guzmán, Gustavo y Orduna, Víctor 2002a "Evo Morales y Felipe Quispe los votos inesperados" en semanario *Pulso* (La Paz) N° 149.
- Laclau, Ernesto 1986 [1977] *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo* (Madrid: Siglo Veintiuno Editores).
- Laclau, Ernesto 1996 *Emancipación y diferencia* (Buenos Aires: Ariel).
- Laclau, Ernesto 2003 [2000] "Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de lógicas políticas" en Butler, Judith; Laclau, Ernesto y Žižek, Slavoj *Contingencia, hegemonía, universalidad* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Lagos, María L. 1997 [1994] *Autonomía y poder. Dinámica de clase y cultura en Cochabamba* (La Paz: Plural Editores).
- Lavaud, Jean Pierre y Lestage, Françoise 2002 "Contar a los indígenas: Bolivia, México, EE.UU." en *Tinkazos* (La Paz) N° 13.
- Ley 1008* (1988) 2002 (La Paz: UPS Editorial).
- Malloy, James 1989 *La revolución inconclusa* (La Paz: CERES)
- Mayorga U., J. Antonio 1996 *Gonismo Discurso y poder* (1985-1989) (Cochabamba: FACES-UMSS).
- Moulian, Tomás 1998 *Chile actual: anatomía de un mito* (Santiago de Chile: LOM Editores, Universidad ARCIS)

- O'Phelan Godoy, Scarlett 1995 *La gran rebelión en Los Andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari* (Cusco: PetroPerú-CBC Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas).
- Oporto Ordóñez, Víctor 2002 *El triunfo de los vilipendiados* (La Paz: Ediciones CITS).
- Orduna, Víctor 2002 "La enfermedad de la coca cero" en semanario *Pulso* (La Paz) N° 129.
- Orduna Víctor 2002a "Los tres meses y un día de Evo Morales" en semanario *Pulso* (La Paz) N° 171.
- Orellana Aillón, Lorgio 2002 "El proceso insurreccional de abril. Estructuras materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes en el Valle Central cochabambino" Informe final Beca JovAgra Clacso-Asdi (Cochabamba) mimeo.
- Patzi Paco, Félix 1999 *Insurgencia y sumisión. Movimientos indígena-campesinos (1983-1998)* (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Pinto Parabá, Miguel 2003 "Los yerros de la rebelión del Altiplano" [on line] <<http://www.econoticiasbolivia.com>> (19-10-2003).
- Prada Alcoreza, Raúl 2001 "La fuerza del acontecimiento" en *Tiempos de Rebelión* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Prada Alcoreza, Raúl 2002 "Multitud y poder" en *Democratizaciones plebeyas* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Prada Alcoreza 2002a *Multiplicidades políticas*, mimeo.
- Prada Alcoreza 2003 "Genealogías" en Prada A. *Genealogía del poder* (La Paz) en prensa.
- Prada Alcoreza 2003a "La querrela del gas" (La Paz) mimeo.
- Rancière, Jacques 1996 [1995] *El desacuerdo. Política y Filosofía* (Buenos Aires: Nueva Visión)
- Reinaga, Fausto 1969 *La revolución india* (La Paz: Ediciones PIB [Partido Indio Boliviano]).
- Renan, Ernest 1987 *¿Qué es una nación? Cartas a Strauss* (Madrid: Alianza).
- Revilla Blanco, Marisa 1994 "El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido" en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Rivera Cusicanqui, Silvia 1983 "Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento 'katarista': 1970-1980" en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México: Siglo Veintiuno Editores).
- Rivera Cusicanqui, Silvia 1984 *Oprimidos pero no vencidos* (La Paz: HISBOL-CSUTCB).
- Rivera Cusicanqui, Silvia 2003 "El desarrollo sin coca empobrece a los campesinos" en *Temas en la Crisis* (La Paz) N° 63.
- Romero Ballivián, Salvador 2002 "La elección presidencial 2002: una visión de conjunto" en *Opiniones y Análisis* (La Paz: Fundación Hanns-Seidel-Fundemos).
- Soto, César 1994 "Historia del Pacto Militar Campesino" (Cochabamba: Ediciones CERES) [on line] <<http://www.clacso.edu.ar/~libros/bolivia/ceres/soto.rtf>>.
- Spedding, Alison 1994 *Wachu Wachu. Cultivo de coca e identidad en los Yunkas de La Paz* (La Paz: Hisbol-Cocayapu-Cipca).
- Spedding, Alison 2002 "Batallas rituales y marchas de protesta: modos de apropiarse del espacio en el departamento de La Paz" en *Temas Sociales* (La Paz) N° 23.
- Spedding, Alison 2003 "El impulso al desarrollo rural puede basarse en la coca" en *Temas en la Crisis* (La Paz) N° 63.
- Tapia, Luis 2000 "La densidad de la síntesis" en *El retorno de la Bolivia plebeya* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Tapia Luis 2002 *La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta* (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Tapia, Luis 2002a *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo y modernidad* (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Tapia, Luis 2002b "Movimientos sociales, movimiento societal y los no lugares de la política" en *Democratizaciones plebeyas* (varios autores) (La Paz: Muela del Diablo Editores)
- Tarrow, Sydney 1997 (1994) *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza)
- Toranzo Roca, Carlos 2002 "Bolivia: década y media de cambios políticos y económicos" en Bouzas,

Roberto (comp.) *Realidades Nacionales Comparadas* (Buenos Aires: Fundación OSDE, Grupo Editor Altamira).

Weber, Max 1998 (1922) *Economía y Sociedad* (México: Fondo de Cultura Económica).

Zavaleta Mercado, René 1983 “Las masas en noviembre” en René Zavaleta M. (comp.) *Bolivia Hoy* (México: Siglo Veintiuno Editores).

Zavaleta Mercado, René 1983a “Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia” en René Zavaleta M. (comp.) *Bolivia Hoy* (México: Siglo Veintiuno Editores).

Zavaleta Mercado, René 1986 *Lo nacional-popular en Bolivia* (México: Siglo Veintiuno Editores).

Zavaleta Mercado, René 1987 (1974) *El poder dual* (Cochabamba: Los Amigos del Libro).

Zegada, María Teresa 2002 “Dinámica Política en el Trópico: Actores, conflictos y estrategias destructivas” en Argandoña, Álvaro y Ascarrunz, Carla (comp.) *Seminario Futuro del Trópico de Cochabamba. Escenarios para el Desarrollo Sostenible* (Cochabamba: UMSS-Centro de Estudios de Población).

Žižek, Slavoj 1998 “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional” en Jameson, Fredric y Žižek, Slavoj. *Estudios Culturales: Reflexiones sobre el multiculturalismo* (Buenos Aires: Paidós).

Notas

* Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires). Becario del Programa de Becas CLACSO-Asdi para investigadores jóvenes de América latina y el Caribe, 2002; concurso “Movimientos sociales y nuevos conflictos en América latina y el Caribe”. Premio Agustín Cueva (2004), otorgado por instituciones académicas de Ecuador. Corresponsal de Página/12 en Bolivia.

El más serio intento de revertir esta situación y operar sobre una lógica hegemónica – desplegado por el MNR con posterioridad a la Revolución de 1952– tuvo una corta vida y rápidamente derivó en un régimen de características “cesaristas”; y en reducción “de la hegemonía lograda al espacio burocrático del clientelismo” (Prada A., 2003). Intentos previos y más moderados por encarnar un “proyecto de nación”, como el de Busch o Villarroel fueron aun más trágicos y fugaces.

² Tomamos el término de Baczkó (1999), el autor lo utiliza para analizar la emergencia del sindicato Solidaridad en Polonia, en los años ochenta.

³ Arrueta (1997:5) citado en Camacho B. (1999:23) nota 4.

⁴ Operó aquí una matriz conformada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM) –cuyo “portavoz carismático” era desde hacía varios años Gonzalo Sánchez de Lozada–; sectores internos del MNR liderados por el mismo dirigente; y una nueva élite tecnocrática de escasa o nula filiación partidaria (Mayorga, 1996). Este nuevo bloque de poder se consolidó bajo el “paraguas” de V. Paz, quien contaba con la necesaria legitimación política.

⁵ Las “cifras” de la crisis económica fueron un elemento central en la estrategia discursiva de V. Paz. En el mencionado discurso del 29 de agosto apeló a enunciados tales como: “Los fríos y descarnados guarismos nos muestran un cuadro estremecedor”; “las cifras son de tal magnitud que escapan a la contabilidad de las máquinas comunes de computación”; “la danza enloquecida de las cifras llega a una cima increíble”; “como si todo esto no fuera demencialmente suficiente...”. (ver Mayorga, 1996:90).

⁶ Página Web del MNR (www.mnr.org.bo), y documento “Tiempos de cambios” (citado en Mayorga, 1996:121).

⁷ La inflación alcanzó el 8.000% en 1985 y el 22.000% si se la calcula entre julio de 1984 y el mismo mes de 1985, cuando la UDP entregó –anticipadamente– el gobierno (Toranzo R., 2002:186).

⁸ Tomamos parte del análisis de Tomás Moulian sobre la introducción del neoliberalismo en Chile. Bolivia y Chile fueron las primeras experiencias en la aplicación de las reformas promovidas por los principales referentes de la Escuela de Chicago (para una síntesis de la génesis del neoliberalismo ver Anderson: 1999).

⁹ La capitalización consiste en la inyección de capital por un socio estratégico internacional que obtiene el 50% del capital accionario de la empresa y toma para sí el control de su administración; el otro 50% es transferida a los ciudadanos bolivianos mayores de 21 años, mediante su transferencia en fideicomiso a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con cuya renta deben pagar el Bonosol a los bolivianos mayores de 65 años (Toranzo R., 2002:197).

¹⁰ Ver, entre otros, Malloy, 1989; Zavaleta, 1987; García Argañarás, 1993.

¹¹ Empresa subsidiaria de International Water Limited de Londres –un consorcio internacional del que forma parte la firma estadounidense Bechtel Enterprises Inc.–.

¹² Esta ley establecía que “Ninguna persona natural o jurídica de carácter público, asociación civil con o sin fines de lucro, sociedad anónima, cooperativa, municipal o de cualquier otra naturaleza, puede prestar servicios de agua potable o servicios de alcantarillado sanitario en zonas concesibles, sin la debida concesión emitida por la Superintendencia de Saneamiento Básico”. El préstamo del BID estaba condicionado a una ley marco: la Ley del Recurso Agua (Orellana A., 2002).

¹³ Incluso se ha señalado que la mayoría de los grupos más activos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad –los denominados “Guerreros del agua”- eran personas que vivían en barrios o espacios donde no llega la red de agua potable y menos la de alcantarillado (Escóbar Álvarez, F., 2000), jóvenes marginales “mimados por comerciantes minoristas y vecinos solidarios [...] que en otras circunstancias los hubieran linchado por robo” (Orellana A., 2002:1).

¹⁴ Álvaro García Linera, entrevista, La Paz, febrero de 2003.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ “Los hacendados apoyados por las autoridades locales no aceptaron el nuevo orden [emanado del Primer Congreso Indígena de 1945], dando lugar a que los campesinos se movilizaran y organizaran los primeros sindicatos rurales en los valles de Cochabamba (Gordillo, 2000:21)

¹⁷ “En este caso los hacendados conservaban una porción de tierra cultivable y los ex colonos recibían parcelas individuales. Tanto el hacendado como los colonos podían acceder a tierras no cultivables y comunales de pastoreo” (Lagos, 1997:68), esta clasificación de las haciendas – como latifundios o haciendas medianas– dependía muchas veces, según la autora, de los contactos políticos de los hacendados, de la organización y militancia de los colonos, y de la propia arbitrariedad de los jueces. La ley también distinguía al latifundio de la “empresa agrícola” (en las cuales el hacendado había invertido capital y pagado salarios) que no eran afectadas (Lagos, 1997:68). Los intentos del ala izquierda del MNR de formar cooperativas bajo la dirección minera fracasaron, y se optó por la parcelación individual de las propiedades agrarias reclamada por los campesinos (Gordillo, 2000).

¹⁸ Mientras la derecha del MNR mantenía el criterio de la inferioridad del campesinado debido a su ignorancia, la izquierda movimientista creía que los campesinos constituían una clase social sin objetivos políticos propios; por lo que ambas fracciones reforzaron las relaciones de dominio/subordinación que enfrentaban a los ciudadanos con los campesinos (Gordillo, 2000:146). Por otra parte, “la contrarrevolución funcionaba coordinadamente en el país bajo la tutela de un poderoso sector del MNR, el blanco de su artillería era el tema agrario y su objetivo la recuperación del territorio hacendal” (Ibid:103).

¹⁹ El *Manifiesto de Tiwanaku* denunciaba: “Somos extranjeros en nuestro propio país”.

²⁰ Literalmente significa “desnudo”, se utiliza para nombrar a las élites blanco-mestizas.

²¹ Sobre las organizaciones indígenas del Oriente ver Patzi (1999). Allí hay una detallada descripción del proceso, que incluyó a la histórica “Marcha por el Territorio y la Dignidad” realizada en 1990, desde Trinidad hasta La Paz.

²² Quienes cuestionan su liderazgo sostienen que Felipe Quispe no ha transitado todos los cargos comunitarios, requisito para ser autoridad máxima de la comunidad (ver Patzi, 1999:83; Albó, 2002:81).

²³ Existe una fuerte disputa –al interior de la CSUTCB– entre los campesinos de origen aymara (comunarios) y los cocaleros, quechua hablantes, más ligados a la producción agraria con destino mercantil.

²⁴ El documento del IV Congreso de la CSUTCB, reunido en Cochabamba del 27 de enero al 2 de febrero de 1994, afirma: “[...] Víctor Hugo Cárdenas constituye en nuestra historia el típico indígena ‘aymara’ que habiendo leído y escrito, siendo ahora parte de la estructura dominante, ahora piensa como ellos y para ellos y terminó sirviendo a sus patrones [...] el Congreso declara a Víctor Hugo Cárdenas enemigo y traidor por haber entregado nuestros símbolos al representante del imperialismo, en nombre de los indígenas, originarios y campesinos, y si lo hizo es solamente en su condición de llunk’u y a título personal” (Citado en Patzi, 1999:116).

²⁵ Las dos regiones productoras de coca en Bolivia son el Chapare (en el subtrópico cochabambino) y los Yungas (norte de La Paz). Como se explicará más adelante la primera región ha sido la más conflictiva dada la normativa vigente (Ley 1008). Aunque nos centraremos en las seis federaciones campesinas del Chapare, haremos mención a las otras seis federaciones de los Yungas a los efectos de dar una visión de conjunto de la problemática abordada.

²⁶ Spedding (2003:17) sostiene que “La visión anti-coca interpreta la expansión posconquista del consumo de la hoja de coca como resultado de la opresión de la población indígena en particular en la mita minera, donde los explotadores españoles fomentaban deliberadamente el vicio del acullico con fines de extraer más plusvalía de los colonizados. Por eso se argumenta que los que defiendan el consumo cotidiano de la coca como una tradición andina se equivocan; en realidad están defendiendo una señal de la degradación colonial, los andinos libres apenas hubiesen acullicado excepto en las celebraciones más excepcionales”.

²⁷ “Durante el golpe del ochenta, de Luis García Meza –conocido como el golpe de la cocaína– hubo una fuerte represión contra el movimiento cocalero yungueño, porque ya no nos permitieron sacar la coca. Ahora libremente toda la coca sale de aquí, pero en esa ocasión no nos dejaban sacar ni una hoja. Todo estábamos obligados a vender a los funcionarios del Estado, que tenían en todas las poblaciones sus puestos de acopio. Luego nos enteramos que esa coca era llevada en camiones militares a las fosas de maceración. Esto duró unos cuatro o seis meses, hasta que al final se logró sacar una libra por persona. Los agentes de narcóticos ejercían una fuerte represión contra el movimiento sindical, y cometían una serie de abusos (decomisos, robos de bienes, etc.). Hasta que a fines del 80 hubo un gran movimiento en los Yungas en el que asaltaron la oficina de narcóticos que había en Chulumani, donde estaban unos doce funcionarios, que completamente desaparecieron, o sea los hizo pedazos la gente. Esa fue una primera acción de respuesta del movimiento cocalero yungueño” (Dionisio Núñez, entrevista, La Paz, junio de 2003).

²⁸ La zona de *producción tradicional* de coca (artículo 9º) es aquella donde “histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha servido para los usos tradicionales, definidos en el artículo 4º. En esta zona se producirán exclusivamente los volúmenes necesarios para atender la demanda para el consumo y usos lícitos determinados en los artículos 4º y 5º. Esta zona comprenderá las áreas de producción minifundiaría actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del Departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las

provincias de Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba”. La zona de *producción excedentaria* en transición (artículo 10º) “es aquella donde el cultivo de coca es resultado de un proceso de colonización espontánea o dirigida, que ha sustentado la expansión de cultivos excedentarios en el crecimiento de la demanda para usos ilícitos”. Esta zona queda sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y desarrollo, mediante la aplicación de un programa integral de Desarrollo y Sustitución, en el marco de los programas de Desarrollo Alternativo, que cuentan con apoyo financiero internacional. Esta zona comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de Yungas del departamento de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del departamento de Cochabamba. La zona de *producción ilícita* (artículo 11º) de coca está constituida por aquellas áreas donde queda prohibido el cultivo de coca. Comprende todo el territorio boliviano, excepto las zonas definidas por los artículos 9º y 10º de la presente ley. Las plantaciones existentes de esta zona serán objeto de erradicación obligatoria y sin ningún tipo de compensación.

²⁹ “La coca, como el café, es un clásico cultivo de minifundio, porque requiere mucha mano de obra, y ciertas etapas de la producción, sobre todo la cosecha, son resistentes a la mecanización. [Pero] en términos de economía campesina, la coca supera al café, porque la inversión inicial aunque alta, es casi toda en forma de mano de obra, y una vez establecida rinde cosechas tres veces al año (y en regiones tropicales más todavía) por unos treinta años; mientras que el café, en el mismo nicho ecológico sólo da una vez al año y, al contrario de la coca no aguanta en suelos gastados [...] Hasta los integrantes de los proyectos de sustitución admiten que ningún otro cultivo puede igualarse con la coca, y es inseparable de la vida en los Yungas. Cuando un hombre llega a casarse, tiene que hacer dos cosas para su nuevo hogar: una casa y un cocal” (Spedding, 1994:38).

³⁰ “Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos”, La Paz, 1-3-2003, [on line] <<http://www.megalink.com/usemblapaz/CertificacionBoliviaEsp2003.htm>>

³ Spedding (2002:86) habla de una suerte de “ritualización” (“reglas de juego”) en los enfrentamientos entre el pueblo y el Estado tácitamente reconocida por ambas partes, y cuando hay heridos o muertos en el curso de estos enfrentamientos, su impacto es enorme en relación con la incidencia estadística de tales acontecimientos, si se lo compara con lo que ocurre en otros países de la región. El diputado por los Yungas y dirigente cocalero, Dionisio Núñez, describe las tecnologías aplicadas en un bloqueo:

“Primero cada federación convoca un ampliado. En el ampliado se resuelve realizar el bloqueo de caminos, por ejemplo para anular un decreto gubernamental. Entonces los compañeros del ampliado retornan a sus centrales, a sus sindicatos de base, e informan todo lo que se ha discutido y aprobado en el ampliado. Cuando se dice bloqueo se dice con 10%, con 25% o con 50% de los afiliados, se determina la cantidad y el lugar a bloquear: dónde, cuándo, todo se discute. Cada sector tiene que controlar la asistencia con una lista. Si los compañeros asignados no concurren al bloqueo el sindicato – después que termina el conflicto– hace su evaluación y resuelve cuál es la sanción que la comunidad va a otorgar a quienes no han salido. Cuando todos llegan hay un comité de bloqueo. Llegan unas 400 personas al bloqueo y se decide esta federación va a bloquear esta parte, esta federación va a estar de guardia, etcétera. Entonces se arman los campamentos, se arma un lugar de seguridad, y el bloqueo se va organizando. Por seguridad se esparcen troncos y piedras en las rutas, porque en algunas ocasiones, cuando no se hacen bloqueos así con obstáculos en el camino, a veces llega el ejército, a veces llega UMOPAR y fácilmente con gas despejan el camino. Nosotros tenemos la estrategia de tirar obstáculos en tres lugares: un bloqueo central, uno mucho más adelante, diríamos una vanguardia, y otro atrás, una retaguardia. Si nos pasan el

primero, se da la señal (con dinamita o bengalas), entonces hacemos fuerza común para que no pasen el bloqueo central. En los bloqueos no hay armas, lo único que hay son palos, o a veces algunas dinamitas, fundamentalmente parapetamos compañeros en lugares inaccesibles –zonas de fuertes pendientes– preparados con piedras allá arriba, si hubiese una intervención, pues cae una lluvia de piedras, y a veces alguna que otra dinamita. Y periódicamente se realiza un ampliado. Sin información la gente no sabe exactamente por qué se está peleando. Nosotros en los bloqueos aprovechamos que la gente está concentrada e informamos sobre el conflicto y sobre otras cosas más, un poco para ayudar a la conciencia de la gente (Dionisio Núñez, entrevista, La Paz, junio de 2003).

³² A diferencia de los bloqueos de caminos, que tienen un efecto negativo sobre una parte de la comunidad, “circular” por el país no implica mayores efectos negativos sobre la población (Camacho B., 1999), lo que incrementa el apoyo social. En las últimas dos décadas se han producido: la marcha minera “Por la Vida y por la Paz” (1986), la marcha indígena “Por el Territorio y la Dignidad” (1990) y las marchas cocaleras “Por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional” (1994) y la marcha “Por la Vida y la Soberanía Nacional” (1995), esta última, protagonizada por mujeres cocaleras, para hablar de “mujer a mujer” sobre las “violaciones a la dignidad humana”, con las Primeras Damas, entre ellas, la esposa del vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas, Lidia Katari. Para un análisis detallado de ambas marchas cocaleras y los contextos de su realización, ver Camacho B. (1999:26-58).

³³ El operativo Nuevo Amanecer, lanzado en julio de 1994, incluyó a más de 800 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), UMOPAR, policía nacional y unidades de tránsito, y culminó con un saldo de un muerto (Felipe Pérez Ortiz) y 600 campesinos detenidos; además de graves denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales represivas.

³⁴ *Pututu*: Instrumento tradicional construido con un cuerno de toro. *Wiphala*: bandera indígena de 49 cuadrados iguales con los colores del arco iris. Su emergencia en los años setenta da cuenta del proceso de “reinención” de la tradición y construcción de nuevas narrativas e imaginarios étnicos y sociales.

³⁵ Recordar el cogobierno MNR-COB y el control obrero de las minas estatales post' 52.

³⁶ Las discusiones a propósito de la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias se remontan a fines de los años ochenta y principios de los noventa. El proyecto de algunos sectores de la comisión impulsora consistía en transformar a la Asamblea en un órgano de poder cuyo desarrollo reemplazara al actual “Estado Colonial Boliviano”. Pero el proyecto original fracasó porque ningún sector político significativo lo tomó como eje de su estrategia.

³⁷ Uno de los participantes, Felipe Cáceres, resume: “A las naciones originarias no nos queda otra alternativa que empezar a construir el instrumento político con un único color: el de la coca” (Contreras B., 1994:10).

³⁸ El otro movimiento emergente de las luchas campesino-indígenas –que conserva la reivindicación del autogobierno y características más regionalistas– es el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), fundado por Felipe Quispe –el Mallku– el 14 de noviembre de 2000, el mismo día y en el mismo lugar en el que Túpac Katari –el líder indígena que mantuvo un cerco de La Paz en el año 1781/2– fuera ejecutado 219 años antes.

³⁹ Casa Campesina, Quillacollo, Cochabamba, 19 y 20 de julio de 2003. En dicho ampliado fueron invitados Álvaro García Linera, Raúl Prada Alcoveza y Andrés Solís Rada como “evaluadores externos”.

⁴⁰ Loayza es fruto del congreso de Sucre (1 al 4 de julio de 2003), el cual no fue reconocido por el secretario ejecutivo –en funciones– de la confederación, Felipe Quispe, lo que derivó en la división de ese organismo sindical campesino. La Central Obrera Boliviana no reconoció a

ninguna de las dos fracciones y colocó una guardia de mineros armados con dinamita en el ampliado obrero posterior a la reunión de Sucre para evitar incidentes, ante los reclamos de ambos grupos, en ocasiones violentos, para ser acreditados.

⁴ En el caso del MAS no se trata ni de una organización de cuadros ni actúa en función de la dinámica del debate del aparato burocrático, intelectual y administrativo interno; su base organizativa son los sindicatos agrarios y organizaciones populares urbanas, y una buena parte de las decisiones políticas partidarias se resuelven preponderantemente en ampliados o congresos sindicales antes que en los niveles de la dirección administrativa del partido (G. Linera, 2003).

⁴² Congreso de la CSUTCB, Sucre, 1 al 4 de julio de 2003, y Congreso del MAS de Coripata, 13 de junio de 2003. En Sucre, algunos oradores cuestionaron que hay diputados no están efectuando el aporte establecido a las organizaciones sindicales. En Coripata, el diputado uninominal Dionisio Núñez fue criticado por varios participantes por haber enviado a su suplente y no haber concurrido personalmente, debido a actividades que tenía pendientes en La Paz.

⁴³ Una militante acusó al diputado Dionisio Núñez de “tacaño” por no aportar dinero a las secciones del MAS de Coroico, “por lo menos para el refresco en las reuniones” (Congreso MAS, Coroico, 14-6-2003).

⁴⁴ Alejo Véliz finalmente se alió con la derechista Nueva Fuerza Republicana (NFR), del ex militar Manfred Reyes Villa, de donde fue luego expulsado.

⁴⁵ La sigla MAS proviene originariamente de la Falange Socialista Boliviana (FSB), fundada por Unzaga de la Vega en 1937 emulando a la fascista Falange Española. Unzaga y el falangismo boliviano organizaban los cuadros de choque que atacaban sindicatos e izquierdistas, y durante la revolución de 1952 fueron la oposición contra-revolucionaria y expresaban a los terratenientes “blancoides” racistas que defendían sus propiedades contra los levantamientos indígenas. A fines de los años '80 el ala de la falange liderada por Añez Pedrasa se fue moviendo a la izquierda y formó el MAS Unzaguista, que se aliaría con grupos como el de Evo Morales para formar la Izquierda Unida. Luego Morales, buscando inscribirse en el sistema electoral, acabó apropiándose de la sigla del MAS, eliminando al unzaguismo como apellido e ideología, aunque manteniendo los mismos colores azules del falangismo (Bigio, 2002).

⁴⁶ Los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de junio de 2002 han sido los siguientes: MNR (22,45%): primer lugar en Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando; obteniendo 11 senadores y 36 diputados. MAS (20,94%): primer lugar en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí; obteniendo 8 senadores y 27 diputados. Posteriormente, el 4 de agosto, a través de un acuerdo MNR-MIR, Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido Presidente por el Parlamento, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución Política del Estado. El MAS rechazó negociar un acuerdo con los partidos “tradicionales” que le permitiera a Evo Morales llegar a la primera magistratura.

⁴⁷ Dicho decreto establecía el control de la circulación y secado de coca en estado natural en el territorio boliviano, prohibiendo la comercialización en mercados primarios de coca proveniente de zonas no tradicionales. Justamente los enfrentamientos en Sacaba se iniciaron luego del fracaso de las negociaciones tendientes a la reapertura del Centro de Acopio de Coca ubicado en dicho poblado, convertido en “el símbolo, el territorio estratégico que había que ganar a como dé lugar” (*La Prensa*, La Paz, 18-1-2002). De esta forma, el decreto –contradiendo la Ley 1008 y en una suerte de “maximalismo anti-cocalero”– le daba un estatus de “sustancia controlada” a la hoja de coca en estado natural, para así poder penalizar su comercialización, transporte y hasta secado (Orduna, 2002).

⁴⁸ La información para la descripción del conflicto de Sacaba fue extraída del matutino paceño *La Prensa*.

⁴⁹ El Decreto 26.415 quedó sin efecto luego de que el gobierno negociara –pese a haber dicho

que no lo haría— con Evo Morales, en medio de fuertes bloqueos de caminos. También se acordó —en el marco de la comisión de mediadores en la que participó la Defensora del Pueblo y la Iglesia— la apertura del mercado de Sacaba, la libertad de los detenidos, el respeto a los derechos sindicales y políticos de Evo Morales, y la no erradicación de coca en los Yungas. Por su parte, la expulsión del Parlamento de Morales fue revertida más tarde por el Tribunal Constitucional, cuando ya había sido reelegido para esa banca, esta vez acompañado por 35 legisladores del MAS.

⁵⁰ El entonces embajador, al final de un discurso en Chimoré (en la región del Chapare) les “recordó” a quienes “quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, que ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos a Bolivia”. Y agregó: “Una Bolivia dirigida por gente que se ha beneficiado del narcotráfico no puede esperar que los mercados de los Estados Unidos se mantengan abiertos para las exportaciones tradicionales de los textiles” (*La Razón*, La Paz, 28-6-2002). Previamente había comparado a los coccaleros con el Talibán (*La Prensa*, La Paz, 15-2-2002).

5 Con una consigna que tiene grandes similitudes a la opción “Braden ó Perón”, utilizada por el peronismo en Argentina en las presidenciales de 1946, el MAS convocó a la ciudadanía a elegir entre Rocha o Morales en los siguientes términos: “Boliviano: tú decides quién manda ¿Rocha o la voz del pueblo?”, invocando al “pueblo sencillo y trabajador” como el sujeto y destinatario de las transformaciones propuestas, en favor de la soberanía y la dignidad nacional. Y utilizando los colores de la bandera nacional para reforzar el significante “boliviano” (Afiche de campaña).

⁵² Una carrera que muchas veces comienza con la secretaría de deportes, la cual permite establecer una gran cantidad de vínculos en las diferentes comunidades. Esa es la experiencia de Evo Morales, y parcialmente, de Dionisio Núñez. El desarrollo sindical de Morales pasó por las siguientes etapas: 1981: Secretario de Deportes del Sindicato San Francisco; 1985-1988: Secretario General Central Campesina 2 de Agosto; 1991-1995: Secretario de Organización de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba; 1993: Presidente del Consejo Andino de Productores de Coca; 1994 hasta la fecha: Presidente de las cinco federaciones coccaleras del Trópico de Cochabamba (que luego serán seis) (Oporto, 2002:20).

⁵³ Muy pocos parlamentarios responden a fracciones con cierta densidad organizativa; tal es el caso del senador Félix Vásquez (representante del Movimiento Indígena Popular [MOP], del norte de Potosí, que actúa dentro del MAS) o del diputado Manuel Morales Dávila (del Bloque Social Patriótico, de matriz nacionalista de izquierda y con menos visibilidad que el MOP). En otros casos, como el de los diputados provenientes de organizaciones sindicales o comunidades-ayllus, se combina la fidelidad —más corporativa— a sus bases, con cierta “disciplina partidaria”. El intento del diputado Rosendo Copa, de la comunidad qaqachaqa, de conformar un bloque indígena transversal a los partidos políticos, generó una fuerte oposición de Evo Morales, Antonio Peredo y otros dirigentes del MAS.

⁵⁴ Evo Morales ha concentrado una gran cantidad de poder en su persona; es secretario ejecutivo de las seis federaciones del trópico, presidente del MAS, jefe de bancada parlamentaria y jefe del Estado Mayor del Pueblo (una coordinadora de movimientos sociales y sindicales paralela a la COB).

⁵⁵ “Cuando estoy en la ciudad, en algún acto, algún brindis, algún cóctel, la gente se me acerca y me dice: ‘Evo, sigue adelante, estamos contigo’. Gente blancoide solidaria. Antes, qué pues! Se alejaban, se escapaban de mí, yo me quedaba solito con mi coctelcito, ahora me falta tiempo para saludar” (Evo Morales, en Orduna, 2002a).

⁵⁶ “Más que programa [el MAS y el MIP] recogen las insatisfacciones, el hastío, la incomprensión, la exclusión expresada en los rostros de la calle y el campo” (Espinoza, Guzmán y Vera, 2002).

⁵⁷ Existe una distinción entre tierra y territorio, incorporando en este último el subsuelo, las

riquezas naturales, el espacio de reproducción cultural indígena, etcétera. En relación a la problemática de la tierra el MAS ha mostrado algunas dificultades: “El tema tierra es más complejo de lo que yo creía, estamos preparándonos para entrar con patada voladora el año que viene al tema tierra y territorio”, reconoció Evo Morales, pero tal “patada voladora” no llegó y, luego de más de un año de gestión, el MAS no ha presentado ningún proyecto sobre el tema tierra.

⁵⁸ “Yo creo que ahora sí se está imprimiendo una ideología más definida [al MAS]. Por ejemplo, una ideología nacionalista, defensa de los recursos naturales, defensa de lo que es de Bolivia. Luego, si estamos hablando de la defensa de los recursos naturales, estamos hablando de la recuperación de las empresas capitalizadas. Indudablemente esto no nos puede dejar a un lado que esa ideología tiene que ser necesariamente antiimperialista. Eso es *sine qua non*, consecuencia inmediata” (Jorge Alvarado, entrevista, La Paz, agosto de 2003).

⁵⁹ Para que esta operación pueda ocurrir es necesaria la presencia de un *otro* –exterior constitutivo– que no sea *una diferencia más* del sistema. Sino una “amenaza” frente a la cual las diferencias (positivas) de los elementos que componen una identidad se cancelen; en la medida en que entran en una relación de equivalencia con las demás frente a dicha “amenaza externa” que marca los límites del sistema. Piénsese en el caso de la unidad nacional en una situación de guerra, o también en la *constitución* del pueblo frente a las élites, la oligarquía, “la embajada”, etcétera.

⁶⁰ En su libro *Autonomía y Poder*, Lagos (1997) estudia las relaciones de dominación y subordinación sustentadas en prácticas e ideologías de reciprocidad, “comunidad” y compadrazgo; y la emergencia de nuevas élites regionales después de la Reforma Agraria, a partir de “la apropiación del excedente campesino a través de ‘tradicionales’ formas de trabajo e intercambio, y de las estrechas relaciones que los grupos dominantes establecen con las unidades domésticas campesinas”.

⁶¹ En su prólogo a *Tempestad en los Andes*, de L. Valcárcel, J.C. Mariátegui señalaba: “La reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla –esto es para adquirir realidad, corporeidad– necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo concretamente como problema social, económico, y político”.

⁶² “En el campo del conocimiento, el universo y el planeta son uno. El ser humano es parte inseparable de la naturaleza. Somos adversarios del paradigma newtoniano (Isaac Newton: científico matemático) que el mundo es una máquina inanimada gobernada por leyes matemáticas eternas. Somos adversarios del siglo de las luces encarnado en John Locke, Thomas Hobbes (filósofo y economista inglés) y de los fundamentos económicos de Adam Smith, todos ellos ideólogos de la actual sociedad industrial, de la llamada sociedad moderna”. *Nuestros Principios Ideológicos*, III Congreso Departamental, Cochabamba, noviembre de 2002.

⁶³ La autora habla de “estado de dominación” cuando –en lugar de mecanismos flexibles y móviles de regulación no simétricos pero sí al alcance de ambas partes, en donde el desequilibrio pueda ser mutuamente trabajado a fin de disminuirlo, limitarlo o darle un cauce– lo que existen son niveles de desequilibrio “irreversibles y crecientes”, como resultado de una determinada cristalización de una relación de fuerzas.

⁶⁴ No estamos sosteniendo aquí que no existan relaciones de poder en las comunidades, sino que existen “múltiples mecanismos de autorregulación que se ponen continuamente en marcha, de manera más o menos conflictiva, en la búsqueda de mutua influencia dentro de la ratificación del sentido de pertenencia” (Gutiérrez, A., 2001a:71).

⁶⁵ Sin duda estas declaraciones están influidas por su expulsión del Parlamento, dos meses

antes. A un año de gestión legislativa, la articulación de lucha social y lucha parlamentaria mostró varias dificultades: “Nosotros tenemos la estrategia de combinar la lucha legal con la lucha movilizadora. Por ejemplo después de que se instala este Parlamento, nosotros proponemos leyes pero como no había movilización entonces esas leyes han quedado rechazadas. En enero comenzamos a hacer la movilización, pero el Parlamento estaba en receso, por eso lo que creo conveniente es saber combinar ambos métodos estratégicamente, dirigidos a la toma del poder. Luego qué plan de gobierno hemos de aplicar a partir de que estemos en el Palacio, y tercero cómo vamos a defender ese proceso. Son tres cosas claves, estratégicas, vitales, para el éxito de esta hazaña que queremos” (Jorge Arzabe, entrevista, La Paz, junio de 2003).

⁶⁶ “El objetivo de una gran parte de los parlamentarios indígenas, cuando ingresamos al Parlamento hace un año, era la ‘refundación’ del Congreso Nacional. Pensábamos que íbamos a hacer mucho en temas de legislación, fiscalización, y asimismo en temas de gestión. Pero resulta que en el transcurso de un año los parlamentarios indígenas casi no hemos tenido resultados, más bien nos sentimos utilizados” (Rosendo Copa [comunidad *qaqachaka*], entrevista, La Paz, agosto de 2003).

⁶⁷ “Algunos parlamentarios indígenas se sientan en las gradas en vez de hacerlo en las filas que corresponden a los diputados. Incluso durante una interpelación fuimos a rogarles que vinieran y no vinieron; mientras el MNR y el MIR ocupaban las primeras filas” (Jorge Alvarado, Ampliado de Evaluación).

⁶⁸ “[Nuestros compañeros diputados originarios] sienten que si bien en un principio tenían un discurso, ese discurso no puede ser repetitivo, y daría la impresión que se les ha acabado el tema. Y eso es producto de que tal vez les está faltando un poco de capacitación. Sin querer pecar de cientista ni querer pecar de intelectual, la verdad y la realidad es que indudablemente, si bien el compañero originario tiene la experiencia de la vida, esa experiencia la tiene en su comunidad. Su mundo vidente no es más amplio más allá de su comunidad o de su área de acción. En cambio una persona que ha llegado a la universidad, su mundo vidente es más amplio y tiene una base más sólida en cuanto a la interpretación de lo que puede estar sucediendo en el país. [...] Yo creo que quizás, aquellos que somos de la clase media y hemos tenido la suerte de llegar a la universidad, o hemos tenido la suerte de vivir en otros países, tenemos seguramente un mayor discurso, pero además de eso, estamos acostumbrados –por lo menos yo creo que eso debería ser una regla en un profesional– a leer, a estudiar. Cosa que no hay en los compañeros originarios, no hay esa cultura. Lo dije en el ampliado, que deberían leer por lo menos el periódico y de esa manera enterarse, leer periódicos de carácter nacional y periódicos de sus zonas, para de esa manera poder enterarse qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en el mundo y qué problemas tienen en sus áreas. [Los diputados indígenas] participan tímidamente [en los grupos de discusión del bloque], porque no entienden algunos aspectos que son netamente técnicos, tal vez, ellos prefieren no participar. Entonces tenemos que ser tal vez un poco más complacientes con ellos, más accesibles, en un idioma más sencillo poder explicarles para que puedan acceder a esta información, y que también ellos se vayan formando, preparando, para que con esa base y la experiencia de la vida, de la vivencia que tienen ellos, puedan hacer sus participaciones dentro del Congreso. Este es un partido nuevo, es un partido donde tenemos gente de todos los niveles, y yo creo que en la medida en que vayamos amalgamando entre nosotros vamos a lograr que haya una mejor participación de todos los parlamentarios (Jorge Alvarado, entrevista, La Paz, agosto de 2003).

⁶⁹ “Sin mesura y con un evidente tufillo racista muchos de los funcionarios ‘de planta’ del Congreso bautizaron sin miramientos a los congresistas indígenas; los adjetivos más usados fueron: ‘la indiada’ y ‘los campeches’. En la puerta de ingreso una diputada que vestía pollera

fue examinada de punta a canto por los guardias de seguridad. ‘Adónde está entrando señora’, cuestionaron inquisitivos (y en tono despectivo) los uniformados. Dicha escena no se repitió, sin embargo, cuando algunos individuos de traje y corbata cruzaron la puerta del Hemiciclo” (*Correo del Sur*, Sucre, 4-8-2002).

⁷⁰ Cuando se discutía dónde alojar a los campesinos que acudirían al acto de firma de la Reforma Agraria (1953) el Comité Pro-Cochabamba se negó a admitir la presencia indígena en el ámbito urbano en los siguientes términos: “En un país democrático nada podemos oponer a tal concentración [de indígenas en la ciudad]. Sin embargo, se hacen notar los siguientes problemas: 1) El peligro que entrañaría alojar a esas personas en escuelas y colegios que podrían quedar contaminados por parásitos; 2) La zozobra que su presencia ocasionaría en los habitantes [urbanos] y principalmente en señoras y gente nerviosa; 3) Los resultados de una concentración tan grande para la atmósfera de la ciudad” (*Los Tiempos*, Cochabamba, citado en Gordillo, 2000:161).

⁷¹ Estas lógicas corporativas, diferentes de las de la democracia representativa, se expresan por ejemplo en la necesidad de contar con autorización de las autoridades tradicionales o sindicales para hacer campaña en las comunidades del Altiplano o del Chapare. Por ejemplo el MIP en la campaña de 2002 no entró en el Chapare “porque Evo no le dio permiso” (Espinoza, 2002).

⁷² “[Cuando asumimos] el 6 de agosto del año pasado [2002] cada uno de nosotros no conocía ni a diez personas [de los 35 que fueron elegidos diputados o senadores]. Prácticamente éramos desconocidos” (Antonio Peredo, entrevista, La Paz, febrero de 2003). Los resultados electorales en Potosí son reveladores. Allí el MAS presentó sólo un candidato a senador y obtuvo los votos para ingresar dos, por lo que tuvo que hacer una presentación para que el senador suplente fuera reconocido como segundo titular. “¿Y por qué no tenemos, pues, la lista completa?” –preguntó el senador electo por Cochabamba, Filemón Escóbar, al enterarse de los resultados. “Es que nadie quería” –le respondieron en su entorno (*Pulso*, La Paz, 2002, N° 153).

⁷³ En el Congreso Departamental del MAS de La Paz (17-8-2003) pudo observarse con nitidez que el momento de mayor “tensión” no fue el de discusión ideológica –seguido con poca atención por los participantes– sino el de la elección de los cargos partidarios departamentales, donde cada grupo gremial postulaba a sus representantes.

⁷⁴ La denominada “guerra del gas” comenzó en oposición a la venta de gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos, país que, en la guerra del Pacífico (1879-1886) se apropió del litoral marítimo boliviano. Pero rápidamente incorporó la demanda de “recuperar” los recursos naturales en manos de las empresas transnacionales. La crisis puso en marcha una poderosa maquinaria bélica indígena-comunitaria –tanto en el campo como en centros urbanos como la ciudad de El Alto– que enfrentó a las Fuerzas Armadas estatales apelando al denso tejido organizativo del mundo popular boliviano. El 17 de octubre de 2003, tras haber perdido el apoyo de los sectores medios urbanos, Sánchez de Lozada renunció y huyó a Estados Unidos, donde vive en la actualidad.